

Adaptaciones nacionales del Protocolo regional de investigación de delitos de violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar

Investigación del Ministerio Público
y Coordinación con Policía en Panamá

Pilar Jiménez Bados
Ana María Galdeano Santamaría

Colección Documentos de Política nº 29
Área: Justicia

Adaptaciones nacionales del Protocolo regional de investigación de delitos de violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar

Investigación del Ministerio Público
y Coordinación con Policía en Panamá

Pilar Jiménez Bados
Ana María Galdeano Santamaría

Documento de Política nº 29

Área: Justicia



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita:

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocias-ii.eu

Con la colaboración:

Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos



Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos



Policía Nacional, Panamá



Procuraduría General de la Nación (PGN), Panamá



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, mayo 2015



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Agradecimientos

Esta publicación es fruto del esfuerzo conjunto de personas e instituciones con un firme y definido compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Todo empezó allá por 2012 cuando cinco Ministerios Públicos y cinco Ministerios de Justicia decidieron participar en la acción de EUROsociAL II **Violencia de Género e Iberoamérica: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional** impulsada desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la COMJIB y ejecutada técnica y financiera por esta última.

El primer hito regional lo logramos al aprobar el Protocolo Regional de Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Intrafamiliar con Perspectiva de Género en Noviembre de 2013 en el seno de la AIAMP con el apoyo de 20 Fiscales Generales de Iberoamérica. Luego en 2014, la Comisión Delegada de Ministros Justicia refrendada por la Plenaria en 2015, aprobó el **Protocolo Regional de Atención Integral a la Víctima de Violencia de Género**.

Son más de dos años trabajando sobre la base de estos instrumentos en las adaptaciones nacionales en siete países: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Acompañando estos procesos se han formado más de 600 policías, fiscales y peritos forenses en los contenidos de estos protocolos, premisa indispensable para su aplicación. Abordamos en la actualidad el reto de acompañar su aplicación y corregir los posibles errores de su planteamiento inicial.

La publicación de estos protocolos permite que los Ministerios Públicos, Fuerza Pública y Seguridad e Institutos de Medicina Legal difunda entre sus operadores y las usuarias de sus servicios el contenido de las normas técnicas que posibilitan un trabajo conjunto, ordenado y eficaz en pro del acceso a la justicia de las mujeres.

Agradecemos desde la COMJIB el compromiso de Ministerios Públicos, Fiscalías y Policías de estos países y de otros que han colaborado transfiriendo su experiencia y conocimiento: México, España y Argentina. También a los Ministerios de Justicia y otras instancias de los ejecutivos como los Mecanismos de Igualdad que han apoyado la

acción de EUROSociAL desde sus inicios. Igualmente a los institutos de Medicina Legal, especialmente a su Red Latinoamericana y al IML de Nicaragua que ostenta su Secretaría.

Estas publicaciones no habría sido posibles sin los/as expertos/as públicos y privados que se han involucrado en todos los casos más allá de lo esperado con la consecución de los Protocolos. Es un lugar común pero también muy cierto afirmar que las personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres ponen todo su empeño y dedicación en la causa, en este caso los expertos/as europeos y latinoamericanos no han sido menos.

Madrid, julio 2015

Luz Entrena

*Técnica responsable de las acciones de lucha contra
la violencia de género de EUROSociAL II*

Índice

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN MINISTERIO PÚBLICO-POLICÍAS	9
1. Introducción	11
2. Marco normativo actual	15
3. Perspectiva de género en la investigación de los delitos.....	19
4. Fases de la investigación	23
4.A. Inicio de la investigación	23
4.B. La dirección de la investigación.....	39
4.C. Formulación de la acusación.....	42
4.D. Finalización del proceso	43
5. Compromisos necesarios para la viabilidad del protocolo.....	45
6. Seguimiento y evaluación del protocolo	47
Anexo I. Formulario de valoración del riesgo contra la víctima de violencia de género	49
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMETIDOS EN EL MARCO DE LAS RELACIONES DE PAREJA E INTRAFAMILIARES.....	51
1. Introducción.....	53
2. Perspectiva de género.....	55
3. Antecedentes legislativos	57
3.1. Ámbito internacional.....	57
3.2. Marco normativo nacional.....	57

4. Inicio de la investigación	61
4.1. Denuncia ante el Ministerio Público.....	61
4.2. Denuncia ante el Centro de Recepción de Denuncias (CRD).....	65
4.3. Denuncia ante la Personería	67
4.4. Denuncia ante la Corregiduría y/o Juzgado nocturno.....	68
4.5. Llamada de la víctima a la policía. Delito flagrante.....	69
4.6. Informe de sospecha	69
4.7. La víctima no quiere denunciar	70
5. La Oficina de Atención a Víctimas y la Unidad de Prevención y Asistencia a la Víctima	71
6. La declaración de la víctima y su contenido	73
7. Carta de derechos de la víctima.....	77
8. Valoración de riesgo.....	79
9. La protección de la víctima	81
9.1. Medidas de protección de la víctima.....	81
9.2. Control de las medidas de protección: Unidades de Policía Preventiva Comunitaria	83
10. Víctimas especialmente vulnerables	85
10.1. Pertenecientes a comunidades indígenas o minoría nacional o étnica, religiosa o lingüística	85
10.2. Niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos propios de la violencia de género	85
10.3. Mujeres con discapacidad física o psíquica.....	87
10.4. Mujeres extranjeras, migrantes, refugiadas o desplazadas internas.....	87
11. Datos, elementos y diligencias imprescindibles que han de constar en el expediente fiscal para investigación de delitos de violencia contra la mujer. Organización de la fiscalía de violencia contra la mujer	89
12. Formas alternativas a la conclusión del proceso	91
12.1. Conciliación y mediación	91
12.2. Principio de oportunidad	91
12.3. La suspensión condicional del proceso. (Solo para el delito de quebrantamiento)	91
12.4. Los acuerdos de pena	92
12.5. La retractación.	93
12.6. El desistimiento de la denuncia.	93

13. Especial mencion a la investigacion de los delitos de femicidio, agresion sexual y quebrantamiento de medida de proteccion	95
13.1. Femicidio	95
13.2. Tentativa de femicidio/homicidio	97
13.3. Delitos sexuales	99
13.4. Delito de quebrantamiento de medidas de protección	99
14. Condiciones para la viabilidad del protocolo	101
14.1. Medidas a adoptar por parte del Ministerio Público de Panamá	101
14.2. Propuesta de modificación legislativa	103
14.3. Coordinación con otras instituciones	104
14.4. Atención a la víctima	106
ANEXOS	107
Anexo I. Información a la víctima de los servicios jurídicos de la ciudad de Panamá	109
Anexo II. Modelo de denuncia	110
Anexo III. Modelo de valoración de riesgo	114

Protocolo de coordinación Ministerio Público-Policías

1. Introducción

1.- La violencia contra la mujer es una lacra mundial que afecta a todas las sociedades y viola los derechos humanos de las víctimas que la sufren. No existe ninguna sociedad que pueda considerarse inmune a este tipo de violencia, por lo que todos los Estados, en mayor o menor medida, se esfuerzan en erradicarla, en la creencia de que no se trata de un problema individual sino que nos afecta a todos y a todas.

2.- Con carácter previo a abordar los instrumentos con los que podemos luchar contra la violencia contra la mujer, conviene determinar con claridad su concepto. A los efectos de este protocolo, se define la violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar como *“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, siempre que se cometan en el marco de una relación de pareja, hayan o no cohabitado, o cohabiten. Incluye también en su ámbito de aplicación los actos de violencia contra las mujeres cometidos por miembros de la familia o miembros del mismo hogar por razón de la pertenencia de la víctima al sexo femenino.”*

3.- Por tanto, el presente protocolo excluirá de su ámbito de aplicación otras formas de violencia contra mujeres ejecutadas en el ámbito público, y vendrá referido exclusivamente a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito intrafamiliar, como expresión de las relaciones desiguales de poder y dominación del hombre sobre la mujer, característica que la diferenciará de la violencia doméstica en la que si bien las acciones típicas afectan a quienes conviven bajo el mismo techo, el sujeto pasivo puede ser tanto un hombre como una mujer, en situación de especial vulnerabilidad.

4.- El contenido del presente documento se refiere a la violencia intrafamiliar como una frecuente conducta que se escenifica dentro del hogar en perjuicio de la mujer, con independencia de la definición más amplia que se adopta en el Código Penal y en la Ley de Femicidio. No se contrapone, por tanto, a la evolución legislativa que en Panamá dio paso a la modificación legislativa de 1995, ni a la actual de violencia doméstica introducida por la Ley 38 de 10 de julio del 2001, que conlleva la agresión en contra de los miembros de una familia, sean hombres o mujeres.

5.- Panamá, como signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,¹ la Convención sobre los Derechos del Niño,² la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,³ la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer⁴ y su Protocolo Facultativo,⁵ la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, había creado dentro de sus normativas, diversos instrumentos que garantizaban el respeto a los derechos humanos y establecían las garantías necesarias para el ejercicio pleno de estos derechos.

6.- De igual manera, la Constitución Política Nacional establece como misión de los estamentos de seguridad cumplir y hacer cumplir los parámetros legales para proteger la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

7.- El interés de Panamá en luchar decididamente contra esta lacra le llevó a elaborar un Plan **Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana 2004-2014**, que tiene como objetivo disminuir la violencia doméstica y sus consecuencias sociales, económicas y jurídicas.

8.- Esa misma decisión le llevó a participar en el Proyecto “Violencia de género en Iberoamérica: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional”, del programa EUROSociAL de la Comisión Europea, que tiene como objetivo general mejorar la respuesta institucional ante los delitos de violencia de género, a través de una mejora específica de la investigación de estos delitos, en la atención que se presta a las víctimas del mismo y en la coordinación entre Ministerios Públicos y Ministerio de Justicia. El programa se desarrolló en dos fases. En la primera (2013) se promovió la elaboración de instrumentos normativos regionales para favorecer la investigación de este tipo de delitos y la atención a las víctimas del mismo. Específicamente, la Asamblea General de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) aprobó en el mes de noviembre en Ecuador el Protocolo Regional para la investigación desde la perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar. En la segunda fase (2014) se pretende la adaptación del Protocolo Regional a la realidad jurídica de los países participantes, entre los cuales se haya Panamá, representado en el proyecto por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Seguridad Pública, y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Fruto de dicha tarea será la adopción del presente Protocolo de coordinación Ministerio Público- Policía en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres.

1. También conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”. Fue ratificada por Panamá el 8 de mayo de 1978.

2. Ley 15 del 6 de noviembre de 1990, Gaceta Oficial #21,667 del 16 de noviembre de 1990.

3. También conocida como la “Convención Belem Do Pará” y ratificada por Ley N° 12 de 20 de abril de 1995

4. Conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, ratificada por la Ley 4 del 22 de Mayo de 1981.

5. Ratificado por la Ley 17 de 28 de marzo de 2001.

9.- En este contexto, y como antecedentes de este Protocolo, se elaboraron el Protocolo de actuación interinstitucional y el Protocolo de actuación policial en materia de violencia contra las mujeres, violencia doméstica y maltrato a niños, niñas y adolescentes, auspiciados ambos por el Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación, a través del Proyecto de Actuación Integral con Víctimas de Violencia de Género.

10.- Por otra parte, nuestro país ha continuado legislando tanto en la determinación de tipos penales que recojan el adecuado reproche penal de las conductas violentas contra las mujeres, como en la agilización de la investigación de esos ilícitos penales, y en ese contexto se publicó la Ley 82 que tipifica el Femicidio y la Violencia contra la Mujer, y se ha modificado el Código Procesal Penal para ir instaurando el sistema acusatorio que atribuye la dirección de la investigación al Ministerio Público. Además, la Ley 82 del 2013 ha creado el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer en el que se implican el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Mujer, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá, la Asociación de municipios de Panamá y las organizaciones de mujeres de la Sociedad Civil.

11.- Pero las Leyes y las políticas exigen para alcanzar sus objetivos teóricos y resultar eficaces, descender al terreno práctico, por lo que los llamados Manuales o Protocolos de actuación devienen tremendamente útiles al marcar pautas que unifican los criterios de respuesta ante los violentos, por parte de los agentes intervinientes en esta lucha.

12.- El Ministerio Público es la institución constitucional a quien corresponde ejercer la acción penal y velar por la protección de las víctimas. Para el ejercicio de la persecución penal, dirigirá la investigación de los delitos practicando u ordenando la ejecución de las diligencias necesarias para determinar la existencia del ilícito y la autoría.

13.- La Policía es una pieza clave en el sistema de justicia penal, al ser la primera institución que entra en contacto con las víctimas, los agresores, los testigos y las evidencias en sus diversas formas. Sus primeras actuaciones influirán en el desarrollo del proceso, así como en la prevención de los femicidios, y su actitud favorecerá la adecuada respuesta a las víctimas de este tipo de violencia. La percepción del riesgo que los agentes captan en sus primeras actuaciones y su transmisión al Ministerio Público para que éste adopte o inste la medida de protección procedente, favorecerá la adecuada respuesta a la víctima.

14.- Pero la fuerza policial, además de esa importante función, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, auxiliará en la investigación al Ministerio Público, por lo que la coordinación de estas dos instituciones va a resultar

clave en el desarrollo del proceso penal, y con este fin se refuerza la figura del Enlace Policial que se creaba en el Protocolo de actuación policial del año 2012.

15.- La referencia que en este protocolo se hace genéricamente a la Policía, incluye a los siguientes componentes de las Fuerzas Publicas: Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y a los auxiliares de la Seguridad Publica.

16.- Este protocolo se enmarca en un momento histórico en el que se está implementando en Panamá el sistema acusatorio. La confluencia de circunstancias, por un lado, la decidida apuesta gubernamental de luchar contra la lacra que supone la violencia contra las mujeres, y por otro la implantación de un nuevo sistema procesal que conlleva cambios sustanciales para las dos instituciones, exige buscar unas pautas de actuación que, de forma práctica, ayuden y faciliten la obligada conexión entre ambas, con el objetivo final de mejorar la respuesta que demos a la sociedad y a las víctimas.

17.- Por ello, partiendo, como se hizo constar anteriormente, del Protocolo de actuación interinstitucional, del Protocolo de actuación Policial, así como del Protocolo Regional de investigación con perspectivas de género aprobado por la AIAMP y de su adaptación a la legislación panameña, que se desarrolla en paralelo a este proyecto, se ha considerado conveniente elaborar un nuevo Protocolo que, teniendo en cuenta las novedades legislativas, tanto sustantivas como procesales, establezca las pautas prácticas de actuación que ayuden al Ministerio Público y a los cuerpos policiales en su trabajo diario, poniendo énfasis en su coordinación, que sin duda redundará en una actuación más eficaz.

2. Marco normativo actual

18.- Antes de abordar los criterios de actuación por parte de los agentes intervinientes, conviene recordar el actual marco normativo tras la evolución legislativa que se ha producido en la regulación de la violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar.

19.- Además de los Convenios internacionales suscritos a los que se ha hecho referencia en la introducción del protocolo, las normas sustantivas más relevantes han sido:

- a. La Ley No 27 de junio de 1995, la primera norma que consagró la violencia intrafamiliar como delito.
- b. La Ley 4 de 1999, de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.
- c. La Ley 38, de 10 de junio del 2001, que reformó el Código Penal en esta materia, incluyendo como víctima de este delito a la pareja sentimental que no hubiese cumplido los cinco años de relación si se acreditaba la intención de permanencia, a quienes hayan finalizado ya la relación afectiva en el momento de la agresión, así como a las parejas que hayan procreado un hijo. Además esta Ley amplió las medidas de protección a las víctimas.
- d. La Ley 16 del 2004 que tipificó los delitos contra la integridad y libertad sexual.
- e. La Ley 14 de 2007, que adoptó el Código Penal de la República de Panamá, y sus posteriores modificaciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010.
- f. La Ley 63, de 28 de agosto de 2008, que incorpora medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica.
- g. La **Ley 82, de 24 de octubre de 2013**, *que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer* ha modificado de manera relevante la regulación sustantiva estableciendo los tipos penales que castigan la violencia contra la mujer y las medidas para su protección, por lo que dada su importancia para quienes intervienen en su aplicación, en una u otra fase, conviene hacer especial alusión.

20.- La Ley 82, con carácter previo a abordar la regulación sustantiva, establece en el capítulo VI obligaciones que nos atañen y que conviene recordar. El artículo 31

determina que el Ministerio de Seguridad Pública tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Actualizar los protocolos para las fuerzas policiales y monitorear su cumplimiento, a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización y facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial.
- Crear una fuerza policial especializada que intervenga en la atención de la violencia contra las mujeres en coordinación con las instituciones gubernamentales.
- Crear e implementar un registro computarizado de agresores y estadísticas desagregadas, el cual deberá ser consultado por las instituciones directamente involucradas en la detección, la atención, la investigación y el juzgamiento de la violencia contra las mujeres.
- Sensibilizar y capacitar a las fuerzas de policía en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos.
- Incluir en los programas de formación y a todos los niveles jerárquicos de las fuerzas de policía, asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial contra la violencia en las mujeres.
- Garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia asegurando la presencia de policía especializada en el tratamiento de este problema y su formación específica en instrumentos e indicadores de valoración del riesgo.
- Garantizar que en cada zona de policía o cuartel haya una unidad con formación en violencia contra las mujeres, que sea la persona que entreviste a las víctimas o denunciantes que se presenten.

21.- A continuación, el artículo 32 establece que el Ministerio Público tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Fortalecer la implementación de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género en apoyo de las mujeres víctimas de violencia.
- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección.
- Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia.
- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas por género, las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas.
- Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención.
- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia con otras instituciones gubernamentales u organizaciones privadas o internacionales sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres.
- Promover la formación de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres.

- Consultar el registro de agresores antes de decidir sobre la aplicación o no de una medida de protección para valorar el riesgo que corre la víctima.
- Entrevistar a la víctima por separado del agresor.

22.- En cuanto a las Disposiciones Penales, se incorporan una serie de novedades:

- La prohibición de invocar costumbres o tradiciones culturales o religiosas para impedir la investigación penal o para eximir de culpabilidad el delito de violencia contra las mujeres o cualquier persona.
- La prohibición de aplicar la pena de arresto de fines de semana cuando se trate de delitos contra la vida, la integridad personal, violencia doméstica y contra la libertad sexual, trata de personas, si la víctima es una mujer.
- Se regula en el artículo 132-A el Femicidio, imponiendo una pena de 20 a 25 años de prisión. Por tal se entenderá la muerte de una mujer concurriendo, entre otras, la circunstancia de previa existencia de una relación de pareja o el intento infructuoso de establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o cuando existan vínculos de parentesco con la víctima. Así mismo se sancionará como Femicidio la muerte de una mujer cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima, cuando el autor se haya aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima, cuando se haya menospreciado o abusado del cuerpo de la víctima para satisfacer los instintos sexuales, y cuando se le haya dado muerte por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto de relaciones desiguales de poder.
- Se introduce la figura de la inducción o ayuda al suicidio de una mujer mediante el maltrato.
- Se incrementa la pena del delito de lesiones cuando estas se ocasionen como consecuencia de la violencia contra la mujer.
- Se adiciona la violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra una mujer o mediante la obligación a hacer o dejar de hacer, tolerar explotación, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera otras conductas semejantes. La pena se elevará en este caso, cuando ocasione daño psíquico.
- Se zanja la polémica que la interpretación por parte de la jurisprudencia había efectuado en relación con el artículo 2 de la Ley 38 al exigir reiteración en la conducta agresiva. Conforme a la Ley de Femicidio un hecho de violencia aislado es constitutivo de delito, sin ser preciso acreditar un previo patrón de conducta violenta del varón.
- Se regula el hostigamiento con agresión física, psicológica o patrimonial contra otro miembro de la familia.
- Se introduce la violencia económica contra la mujer por menoscabo, en distintas modalidades, de sus derechos patrimoniales.
- Se adiciona el delito de quebrantamiento de las medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un proceso penal.

23.- En el capítulo VII se establecen como novedades procesales:

- El establecimiento de instrumentos de seguridad con receptor en la víctima, a la que debe informarse del riesgo que implica para su vida acercarse a menos de 200 metros de su agresor, y orden de detención en caso de incumplimiento.
- La regulación de responsabilidad disciplinaria del funcionario público que, a sabiendas de la comisión de un delito, no lo denuncie.
- La posibilidad de que la autoridad competente dicte medidas de protección con la sola denuncia de un hecho de violencia contra la mujer.
- La posibilidad de que sea una tercera persona quien denuncie un caso de violencia sexual contra una mujer.
- La admisión de un acompañante para las mujeres víctimas de violencia que lo soliciten, así como de asistencia jurídica gratuita durante el proceso.

24.- Pero si importante ha sido la reforma sustantiva que ha introducido la Ley de Femicidio y Violencia contra la Mujer, no menor interés conlleva la reforma procesal establecida por la **Ley 63, de 28 de agosto de 2008**, modificada por la Ley 48, de 1 de septiembre de 2009, al optar por el sistema acusatorio, caracterizado por la atribución al Ministerio Público de la función de investigación de los delitos, así como por inspirarse en los principios de oralidad, inmediación y contradicción entre las partes.

25.- El sistema gradual de implementación del sistema acusatorio, que en el momento de la redacción de este Protocolo, afecta a los Distritos Segundo y Cuarto, es, por una parte, una dificultad añadida a la hora de establecer las pautas de coordinación, pero, por otra, esta situación demanda una mayor necesidad de concreción en cada uno de los casos, buscando un criterio unificador ante la diversidad.

3. Perspectiva de género en la investigación de los delitos

26.- La coordinación entre el Ministerio Público y los distintos cuerpos policiales favorece la respuesta ofrecida a la ciudadanía en la lucha que se desarrolla contra la delincuencia genérica, pero en el ámbito de la violencia contra las mujeres hay un componente añadido por la situación de impunidad que trasciende, en parte porque son delitos que se desarrollan en su mayoría en el ámbito privado, y de otra parte, porque la discriminación por razón de sexo está muy instalada en la sociedad, por lo que se hace doblemente exigible, en mayor medida, si cabe, esa coordinación.

27.- Las circunstancias relatadas nos inducen a pensar que la investigación de los delitos que se cometen contra las mujeres en el marco de relaciones de poder asimétricas, por sus parejas o familiares, conllevará mayor dificultad que la ofrecida por otros tipos de ilícitos penales, y además, sabemos que las víctimas de estos delitos, en muchos casos no van a colaborar, y cuando lo hacen, porque han tomado la decisión de huir de su situación, requerirán mayor protección. A esa mayor dificultad en la investigación y a esa elevada necesidad de protección debemos responder con una actuación coordinada cuyos resultados redundarían en el conjunto de la sociedad porque el avance de las sociedades no se mide tan solo en criterios económicos, sino culturales, y, sobre todo, en el respeto de los derechos humanos.

28.- Investigar los delitos de violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género requiere tener en cuenta una serie de consideraciones, tanto por parte del Ministerio Público como por los agentes de los Cuerpos de Policía. Esta perspectiva conlleva:

- a) Optar por la especialización para garantizar la respuesta más adecuada en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. La existencia de unidades policiales especializadas en esta materia, garantiza la sensibilidad necesaria para abordar a las víctimas de violencia de género, así como la capacitación específica en técnicas de investigación y asistencia a las víctimas.
- b) Poner a las mujeres y niñas en el centro de la investigación. La atribución que en el artículo 69 del Código Procesal Penal hace el legislador al Ministerio Público de velar por las víctimas de la investigación, y la obligación de los cuerpos policiales

en el mismo sentido supondrá, en este caso, adoptar las medidas necesarias para asegurar el seguimiento, acompañamiento y protección de las víctimas y/o sus familiares, siendo este un objetivo prioritario de ambas instituciones, tanto en la labor de prevención, como cuando ya se ha presentado denuncia.

- c) Facilitar la participación de las víctimas en todas las fases de la investigación y del proceso judicial. La víctima de la violencia de género que lucha por salir del círculo de la violencia necesita sentir que es parte y partícipe del proceso.
- d) En materia de violencia sobre la mujer se impone la Tolerancia 0. Por tanto las costumbres de los pueblos indígenas no podrán emplearse para justificar cualquier tipo de violencia sobre la mujer.
- e) Evitar por ambas instituciones la revictimización. En esta situación se coloca a la víctima cuando se le obliga a comparecer relatando y reviviendo los hechos de que ha sido objeto, en reiteradas ocasiones, ante las distintas instituciones que forman parte del sistema judicial penal.
- f) Poner especial atención en las víctimas especialmente vulnerables. Cuando quienes deban prestar testimonio sean menores o personas especialmente vulnerables, debe acudirse a la posibilidad prevista en el artículo 391 del Código Procesal Penal y obtener grabación o videofilmación íntegra del testimonio para su posterior exhibición en el acto del juicio. La prueba anticipada es un mecanismo adecuado en la lucha contra la impunidad derivada de la ausencia de las víctimas en los procesos, debido a las presiones recibidas.
- g) Atender a las víctimas con un enfoque de multidisciplinariedad e integralidad, por lo que no solo se facilitará a las víctimas la información acerca de sus derechos, sino que se incluirá la atención psicológica, el apoyo social y acompañamiento, el asesoramiento legal, y el auxilio tanto a la mujer como a la unidad familiar, favoreciendo su autonomía.
- h) Servirse de técnicas de investigación científico-criminal que permitan acreditar la comisión del hecho delictivo, así como el motivo del mismo, estableciendo ese móvil de dominación en la relación de afectividad. Para ello se analizará, cuando sea necesario, el contexto familiar, económico, social y cultural, de forma que se garantice la rigurosidad en la investigación y se evite la impunidad de estos crímenes.
- i) Actuar con la debida diligencia desde la recepción de la denuncia y/o el inicio de la investigación para recabar el mayor número de evidencias del hecho criminal, evitando que la investigación se centre exclusivamente en el testimonio de la víctima.
- j) Adoptar medidas de protección necesarias para evitar la reiteración de las conductas. La valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género deberá ser exhaustiva para evitar que el agresor actúe contra la vida, la integridad física o cualquier otro bien de la víctima.
- k) Transmitir la gravedad de los hechos, evitando que se adopten medidas alternativas que minimicen la violencia ejercida, impidiendo la adecuada respuesta penal, y ello, a pesar de la falta de colaboración de la víctima. A tal fin, los cuerpos policiales

pondrán en conocimiento del Ministerio Público todos los actos de violencia sobre la mujer de que tengan conocimiento.

- l) Establecer un registro de los agresores de violencia sobre la mujer, así como de las medidas de protección de las víctimas, y establecer los cauces adecuados para que, con las garantías necesarias, se pueda acceder a esa información por parte de ambas instituciones.
- m) Incluir en los planes de formación de ambas instituciones, y a todos los niveles, actividades de sensibilización en género, igualdad y no discriminación, y capacitación específica en los delitos de violencia sobre la mujer, en su investigación, así como en el adecuado trato a las víctimas.
- n) Elaborar instrucciones internas de obligado cumplimiento que permitan a los componentes del Ministerio Público y de la Policía abordar la investigación de los delitos de violencia de género con la perspectiva adecuada.

4. Fases de la investigación

4.A. Inicio de la investigación

29.- Dos principios fundamentales han de regir la tarea investigadora de los cuerpos de policía:

- **Prevención.-** Con carácter previo, antes de abordar la investigación propiamente dicha, hay que poner de manifiesto que la Policía no solo tiene la función de investigar los delitos y proteger a las víctimas de la violencia, tras la comisión de aquellos, sino que en primer lugar debe enfocarse en detectar y prevenirlos, para impedir que se cometan nuevos delitos. Los miembros de los distintos cuerpos policiales, en especial las unidades especializadas en violencia doméstica y contra las mujeres, desempeñan un papel preventivo importante. La información obtenida por los agentes policiales en este sentido, será transmitida lo más pronto posible al Ministerio Público para la adopción de las medidas preventivas pertinentes.
- **Coordinación.-** El adecuado inicio de la investigación marcará el devenir del proceso, por lo que será preciso, no solo llevar a cabo las actuaciones básicas con corrección, y decidir las diligencias apropiadas a la investigación, sino coordinar todas las actuaciones, de forma que el equipo de investigación que constituye el Ministerio Público con el auxilio de la Policía, logre la respuesta eficaz.

A fin de lograr esta coordinación, se nombrará en cada estación policial, entre los miembros que formen parte de las unidades especializadas, o en su caso, y hasta que ello sea posible, entre los de mayor capacitación en violencia contra la mujer, un agente que sirva, en cada caso, de enlace. El/la agente de enlace se encargará de mantener comunicación directa con el/la Fiscal de Familia o agente del Ministerio Público competente según la zona, a fin de coordinar tanto las actuaciones de investigación como el seguimiento de las medidas de protección.

La comunicación entre ambas instituciones se llevará a cabo, en función de las circunstancias, por teléfono, por correo electrónico o por fax. En todas las estaciones policiales constarán los teléfonos, correos electrónicos y número de fax, del Fiscal de Familia,

Personero, Agente del Ministerio Público o Fiscal de turno, con quien tenga que coordinar su actuación.

30.- Para fijar las pautas de coordinación, parece oportuno distinguir los casos de delito flagrante de aquellos en los que la investigación comienza por la interposición de denuncia.

4.A.a) Delito flagrante

31.- Cuando la Policía reciba la *noticia criminis*, a través de una llamada telefónica o de una alerta, tanto de la víctima como de terceras personas, los agentes de cualquiera de los servicios de seguridad pública competentes, preferentemente los pertenecientes a las unidades especializadas o los que hayan recibido capacitación adecuada (en adelante, los agentes), se desplazarán de inmediato al lugar de los hechos, actuando sin dilación. Si la víctima se encontrase en un lugar remoto, solicitarán el auxilio de otras autoridades, como personeros, corregidores o regidores, por el medio de comunicación más rápido a su alcance.

32.- Si por las circunstancias de la llamada, el agente se plantease alguna duda, él, o el enlace policial de la estación, deberán ponerse en contacto inmediatamente con el delegado designado por el Ministerio Público, por cualquiera de los medios de comunicación referidos, a fin de concretar la actuación pertinente.

33.- El agente deberá anotar el contenido exacto de la llamada a fin de que posteriormente se refleje en el reporte policial, indicando la identidad de quien efectuó la alerta, y, en su caso, su relación con la víctima, los hechos que relata, el tono de su voz (temor, llanto, gritos, ruidos ambientales, etc...), la hora de la llamada y el lugar desde donde se realiza. Así mismo se reflejarán las comunicaciones que se hayan efectuado con posterioridad.

34.- Al llegar al lugar de los hechos, los/as agentes separarán a las partes y las atenderán por separado, tratando de mantener la calma y de restablecer el orden. La actuación de los/as agentes irá orientada a auxiliar a la víctima, detener al presunto agresor y preservar la escena, pero la preferencia de su intervención será la ayuda inmediata a la víctima.

a) En relación con la víctima

35.- Allanamiento: En caso de no apreciarse riesgo para la integridad física de la víctima, se recabará previamente la autorización del corregidor, o del Ministerio Público para que autorice o inste la solicitud de proceder al allanamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Penal.

36.- El/la Fiscal podrá ordenar la realización del allanamiento, sin previa autorización judicial, si hay peligro de pérdida de evidencia o si se deriva de un allanamiento

inmediatamente anterior. Esta comunicación se efectuará por escrito, bien por correo electrónico o por fax, al agente designado enlace, sin perjuicio de adelantarla por medio de llamada telefónica. Esta autorización se someterá, en su caso, al control del Juez de Garantías en la forma establecida en el artículo 306 del Código Procesal Penal.

37.- Cuando los agentes de seguridad pública acudan a un lugar cerrado al que no se les permita la entrada, accederán al domicilio sin previa autorización, únicamente en las siguientes situaciones: cuando aprecien un inminente peligro físico para la integridad física de la víctima, en los casos de flagrancia, para evitar la comisión de un delito o en respuesta a un pedido de auxilio, siempre con intención de salvaguardar a la víctima y conforme a lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal. Este acceso deberá comunicarse con inmediatez al Ministerio Público que lo someterá al control del Juez de Garantías en el plazo de 48 horas.

38.- Si la víctima se encuentra herida, y se estima necesario, se la trasladará al Centro Hospitalario, en el propio vehículo policial si así fuera posible, o recabando el auxilio de una ambulancia. Los/as agentes que la acompañen solicitarán el parte médico para aportarlo con el reporte policial, y en el caso de que no les sea facilitado, harán constar esta circunstancia en el mismo.

39.- En el caso de que la mujer presente heridas y manifieste haber sido víctima de una agresión sexual, los/as agentes que la trasladen al centro hospitalario, lo comunicarán al Centro de salud para que se lleve a cabo una atención especializada, haciendo constar las incidencias en el reporte. Así mismo lo comunicarán telefónicamente al Ministerio Público.

40.- En caso de presentar heridas, pero rechazar la asistencia médica, los/as agentes reflejarán en el posterior informe policial, la descripción de las lesiones y de su estado anímico (temor, angustia, llanto, nerviosismo, frialdad, etc...) así como de su aspecto (ropa rasgada), con la mayor exhaustividad posible, salvo en los casos en los que se lleve a cabo reportaje fotográfico.

41.- En caso de no precisar asistencia médica, los/as agentes atenderán a las víctimas, dándoles confianza y seguridad. Para ello, las desplazarán a un lugar protegido, impidiendo la confrontación con el presunto agresor, y les ofrecerán su ayuda, evitando comentarios para disuadir a la víctima de presentar denuncia, o haciendo juicios de valor sobre su conducta, vestimenta u horarios.

42.- El traslado de la víctima a la Sala de Guardia, se llevará a cabo, en la medida en que sea posible en vehículo separado del que desplace a su agresor, evitando tanto en ese momento, como en otros posteriores, que compartan el mismo espacio físico.

43.- El/la agente informará a la víctima, desde el primer momento, de los recursos policiales y asistenciales existentes a su disposición, y le facilitará los medios necesarios para que denuncie a su agresor.

44.- Así mismo se le informará de su derecho a recibir asistencia jurídica, así como de solicitar medidas de protección. A tal efecto se le entregará esta información por escrito, haciendo constar los teléfonos de contacto, tanto del enlace policial, como del Ministerio Público, así como de la Defensoría del Pueblo, del INAMU, de la Defensoría de las Víctimas, del Departamento de asistencia legal gratuita para víctimas del delito del órgano judicial o cualquier otro organismo que brinde asistencia legal gratuita, del Centro de Asistencia a las Víctimas, y de las instituciones sociales de la localidad.

45.- Se respetará la situación emocional de la víctima, permitiendo que ésta se exprese de manera espontánea, procurando que la narración sea lo más exhaustiva y detallada posible, sin interrumpirla, respetando sus silencios y no manifestando juicios de valor. No obstante este respeto, se le transmitirá la conveniencia de facilitar todos los datos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos, y a los efectos de determinar el riesgo existente, se recabará, en la medida de lo posible, la información mencionada en el apartado relativo a la valoración del riesgo. El estricto cumplimiento de este apartado por los agentes de policía es fundamental para la adecuada protección de la víctima.

46.- En el caso de encontrar en el lugar, niños, niñas, adolescentes, o personas de edad avanzada que convivan con la víctima, se asegurará su tranquilidad, y en caso de traslado de la víctima a centro hospitalario, se procurará su protección con otros familiares o a través de los servicios sociales, en coordinación con las autoridades competentes.

b) En relación con el presunto agresor

47.- Aprehensión: Los servicios de policía adoptarán las medidas necesarias para evitar que el presunto agresor genere cualquier situación de riesgo para la víctima y/o los agentes, acordando su aprehensión si fuera necesario. La aprehensión policial, conforme al artículo 233 del Código Procesal Penal, solo podrá efectuarse sin orden judicial, en los casos de sorprender al agresor en flagrante delito, cuando sea perseguido inmediatamente después de su comisión, o cuando se haya fugado de establecimiento penal u otro lugar de detención. El agente policial que haya aprehendido a una persona, la deberá conducir inmediatamente al Ministerio Público, o al corregidor, en su caso. El Fiscal verificará de forma inmediata si hay mérito para presentarla ante el Juez de Garantías.

48.- El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea aprehendida cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener que es autora o participe de un delito y la investigación así lo amerite. La comunicación se remitirá por escrito al

agente de enlace de la zona policial, y cuando se lleve a efecto se presentará al aprehendido inmediatamente ante la autoridad ordenante, para que sea puesto, en su caso, ante el Juez de Garantías en el plazo de 24 horas, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Penal.

49.- Se informará al detenido de sus derechos conforme a la legislación vigente, comunicándole los motivos y causa de su detención, y la posibilidad de designar un defensor así como de comunicarse telefónicamente con él. Si tras ser informado de sus derechos efectúa declaraciones espontáneas, se recogerán en el posterior informe policial.

50.- Se llevará a cabo el registro corporal a fin de incautar objetos o instrumentos peligrosos que tenga en su poder y pueda estar relacionados con el hecho delictivo. Cuando los agentes presuman que una persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos al cuerpo objetos relacionados con el delito, podrán realizar la requisa de la persona, después de advertirle de la sospecha y previa solicitud de que exhiba el objeto de que se trate. La requisa se llevará a cabo respetando el pudor y la dignidad del afectado. Si se tratara de una mujer, la requisa la efectuará una agente del sexo femenino.

51.- El agente custodiará el vehículo hasta que comparezca la autoridad competente para efectuar el registro, y el agente excepcionalmente podrá proceder al mismo cuando existan indicios de que el presunto agresor ha escondido en ese vehículo, evidencias, y haya riesgo de pérdida de las mismas, siempre que se haga en presencia del aprehendido, se le advierta de la diligencia, y se le haya pedido que lo exhiba.

52.- En caso de que se encuentre herido el presunto agresor, será trasladado al centro hospitalario, y se solicitará el correspondiente parte médico. En caso de no ser entregado, se hará constar esta circunstancia en el reporte policial.

53.- En el supuesto de quedar el agresor hospitalizado, los agentes coordinarán con la autoridad competente la orden de detención a fin de que la institución asigne unidades de custodia.

54.- En tanto no se cree el registro al que se refiere el artículo 14 de la Ley No 69, de 27 de diciembre del 2007, la autoridad competente se pondrá en contacto con la Dirección de Investigación Judicial del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de recabar información acerca de los antecedentes delictivos del presunto agresor.

c) En relación con el lugar de los hechos

55.- Los/as agentes de seguridad pública acordonarán y custodiarán la escena, sin contaminarla. Lo comunicarán inmediatamente al Ministerio Público, que coordinará con la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de Medicina Legal la investigación

y procesamiento de la escena, procediendo a la recolección de evidencias, y garantizando la cadena de custodia.

56.-Así mismo, los agentes de seguridad publica incautarán las armas que hallen en el lugar, excepcionalmente, si es preciso para preservar la seguridad de los presentes, y garantizando la cadena de custodia.

57.-Los/as agentes de la Dirección de Investigación Judicial localizarán a los testigos oculares de los hechos, así como a los de referencia, procediendo a su identificación, consignando el nombre completo, su cédula de identidad, su domicilio y número de teléfono.

58.- Los agentes levantarán informe describiendo el lugar de los hechos y de las evidencias.

d) Especial referencia a los delitos de femicidio

59.- La gravedad que supone la muerte violenta, consumada o intentada, por el mero hecho de ser mujer, exige un especial apartado en cuanto a las primeras actuaciones de los cuerpos policiales, del Ministerio Público y de la coordinación entre ambas instituciones.

60.- En el caso de recibir alerta por la presunta comisión de un femicidio tanto consumado como intentado, los/as agentes de policía especializada acudirán al lugar de los hechos y, tras comprobar la veracidad de la información, se pondrán en contacto telefónico con el Ministerio Público, acordonando la zona inmediatamente y custodiando la escena del delito para preservar las evidencias.

61.- Los/as agentes comprobarán si la persona presenta signos de vida y, en caso positivo, solicitarán asistencia con urgencia para su traslado al centro o instalación de salud. En los casos en los que la mujer no ha fallecido pero los indicios evidencian el ánimo de darle muerte, deben practicarse las diligencias precisas para lograr acreditarlo, evitando, de inicio, la consideración de un delito de lesiones.

62.- Los/as agentes protegerán a la víctima cuando no haya fallecido, máxime cuando el presunto agresor no haya huido del lugar.

63.- En caso de no presentar signos vitales, se dará aviso inmediato al Fiscal de Homicidios o de Femicidio, al Médico Forense, a la División de Homicidios, y a la Unidad de los servicios de Criminalística.

64.- Los/as agentes de seguridad pública deberán proceder a la aprehensión del presunto agresor, si se encontrase en el lugar de los hechos, así como a identificar los datos y objetos de interés para la investigación y los testigos relevantes.

65.- Cuando se presente en el lugar el Ministerio Público, este asumirá la investigación, colaborando los/as agentes en todas las diligencias por él requeridas. El Fiscal coordinará la recolección de las evidencias y la documentación mediante la grabación fotográfica de la escena y las evidencias. Deberá prestarse especial atención a la recogida de fluidos biológicos y químicos, fibras, uñas, huellas u objetos que ayuden a localizar al autor y a determinar la secuencia de los hechos investigados, a la incautación de los instrumentos u objetos empleados en la comisión, etiquetando todos ellos para garantizar la cadena de custodia.

66.- Así mismo, de no haberse producido la aprehensión por no hallarse el presunto agresor en el lugar de los hechos, los agentes de seguridad pública procederán, por orden del Ministerio Público, a su localización, conducción o detención, y presentación ante la autoridad competente.

67.- En caso de suicidio o tentativa de suicidio del presunto agresor, continuará la investigación de la muerte de la mujer de forma semejante a lo antes expuesto, a fin de acreditar la autoría del hecho y las circunstancias de su comisión.

e) Contenido del reporte policial

68.- Tras finalizar las actuaciones básicas descritas, los/as agentes de la Investigación judicial y de seguridad pública elevarán un informe al Ministerio Público, lo más exhaustivo posible, dada su trascendencia en la investigación posterior. A tal efecto, el reporte detallará:

1. Primera intervención de los agentes

La actuación de los/as agentes desde su inicio deberá ser lo más detallada posible, dada la trascendencia que pueda tener en el éxito del proceso. A tal efecto, harán constar:

- Procedencia y hora de la llamada de alerta, así como su contenido.
- Identificación de los/as agentes que acuden al lugar.
- Acceso de la vivienda y la forma de efectuarlo, así como, en su caso, la orden recibida a este respecto.

2. Intervención en auxilio de la víctima

Los agentes describirán la situación de la víctima. A tal efecto, harán constar:

- El lugar en el que se encontraba la víctima, y la situación de peligro detectada.
- Las medidas adoptadas para preservar la seguridad e integridad de la víctima en el lugar de los hechos.

- Su situación física y emocional observada, con descripción del estado de la ropa de la víctima y de las heridas, si presenta.
- La información de derechos que se le facilita.
- Las manifestaciones espontáneas que emita.
- El traslado al centro médico, en caso de que se haya efectuado.
- El informe médico emitido por el centro, o la negativa a entregarlo.
- El acompañamiento, en su caso, para interponer la denuncia, y las medidas que, en su caso, haya adoptado el/la corregidor/a, o el Ministerio Público.
- La manifestación de no desear interponer la denuncia, y el motivo de esa decisión.

3. Intervención en relación con el agresor

Los/as agentes describirán la situación del presunto agresor, haciendo constar:

- La actitud del mismo: alterado, tranquilo, agresivo, violento, etc... así como su reacción ante la presencia policial.
- Las expresiones que profiera: amenazas, insultos u otras manifestaciones.
- La aprehensión, en caso de haberse producido. En este caso se describirá la situación de peligro observada y los motivos de practicarla.
- La información de derechos que se ha llevado a cabo con el presunto agresor.
- La incautación de armas con descripción del lugar en el que las portaba
- La constancia de anteriores detenciones y su motivo, si se conoce.

4. Intervención en relación con la escena y los testigos

Los/as agentes deberán acordonar la escena del crimen e identificar a los testigos. A tal efecto, harán constar:

- La descripción del lugar y de los efectos que tuvieran relación con los hechos.
- La diligencia de identificación de los testigos hallados en el lugar, con indicación de las manifestaciones que hayan realizado sobre la víctima, el presunto agresor, su relación y los hechos observados, así como la intervención que hayan tenido, en su caso.
- La identificación de los familiares que se hallasen en el lugar.

5. Valoración de riesgo

Los/as agentes harán constar la valoración de riesgo que efectúan en función de los criterios derivados del apartado previsto en este protocolo.

6. Diligencias de comunicación efectuadas

En el reporte se harán constar las comunicaciones que ha llevado a cabo el Enlace policial o, en su defecto, cualquiera de los/as agentes pertenecientes a la unidad

especializada, pormenorizando la hora y el medio empleado, tanto con el Ministerio Público como con otras instituciones.

4.A.b) denuncia de un delito de violencia de género

69.- Las denuncias de hechos delictivos pueden interponerse en varios lugares, siendo recomendable utilizar el modelo de denuncia adjunto al protocolo de investigación. En todos los casos, la autoridad o funcionario ante quien la víctima de violencia manifieste su deseo de denunciar, deberá actuar con perspectiva de género. A tal efecto:

- a) En los supuestos en los que una víctima de violencia intrafamiliar se persone en una dependencia policial manifestando haber sido víctima de violencia intrafamiliar, será atendida por la unidad especializada en esta materia.
- b) La citada unidad le facilitará toda la información acerca de sus derechos y de las medidas de protección que pueda solicitar, tanto las establecidas en la Ley 31 de Protección de Víctimas de delito, como las previstas en el artículo 333 del Código Procesal penal. Esta documentación le será entregada por escrito y en la misma constará, además del número de la estación policial, los teléfonos y direcciones del Ministerio Público, del INAMU, del Centro de atención a las víctimas, del Instituto de Medicina Legal, de la Defensoría Pública y de cualquier organismo que brinde asistencia legal gratuita, así como de los servicios sociales de la zona.
- c) En la entrevista con la víctima se favorecerá la interposición de la denuncia, poniéndole de manifiesto que la misma no requiere ninguna solemnidad ni formalidad, informándole de las consecuencias de su interposición, y remitiéndola al Centro de recepción de denuncias, al Fiscal de turno o al personero y al corregidor, en función del sistema procesal implementado en el Distrito de que se trate.
- d) Si la mujer que acude a una dependencia policial a poner de manifiesto su deseo de declarar, presenta lesiones, se le conducirá al Centro Médico, donde se recabará el parte médico, y con posterioridad se le trasladará para facilitar la interposición de la denuncia donde corresponda. Al tiempo de la conducción para que la víctima reciba asistencia, el enlace policial de esa estación policial, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por comunicación telefónica, sin perjuicio de la posterior remisión escrita ampliando los datos.
- e) En el supuesto de que la mujer manifieste que ha sido víctima de una agresión sexual, se la trasladará al Centro Médico correspondiente, dando aviso por parte del enlace policial, tanto al Instituto de Medicina Legal, como al Ministerio Público por medio de comunicación telefónica, sin perjuicio de la posterior remisión escrita ampliando los datos.
- f) En ambos casos, con posterioridad, si la víctima se encontrase en una situación emocional angustiada y no tuviese familiares o amigos que pudieran acompañarle a interponer la denuncia, será trasladada por la unidad policial, que respetará la situación de la víctima, sin proceder a interrogatorio alguno, sino tan solo siendo

receptivos a lo que aquella desee expresar de manera espontánea y sin llevar a cabo valoración alguna.

- g) Deberá estimularse la denuncia, aunque debe respetarse la decisión de no denunciar. Pero si existen evidencias de un delito de violencia de género, y la víctima adulta manifiesta su deseo de no interponer denuncia, se le informará de las medidas de protección que se podrían adoptar y de las posibilidades que existen de superar su situación, así como que, a pesar de su negativa, la Autoridad competente podrá adoptar medidas de oficio tanto respecto de la víctima como del presunto agresor. La decisión de la víctima de no denunciar se pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio Público por medio de comunicación telefónica, sin perjuicio de la remisión de la correspondiente acta por correo postal. A su vista el Ministerio Público valorará si considera necesario adoptar medidas cautelares y/o de protección.
- h) Cuando la víctima sea menor de edad, se dará aviso inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de realizar gestiones para la localización de sus progenitores.
- i) Cuando la mujer víctima de violencia de intrafamiliar comparezca en las dependencias policiales manifestando su deseo de retirar la denuncia interpuesta con anterioridad, se le informará de la imposibilidad de efectuarlo al no estar permitido por el Código Procesal Penal. Este hecho se comunicará posteriormente, por parte del enlace policial de la estación al Ministerio Público que tramita la denuncia, mediante remisión de informe escrito.
- j) En el caso de que la mujer víctima de violencia ponga de manifiesto el quebrantamiento de una medida cautelar, los/as agentes de la unidad especializada la acompañarán a fin de que interponga la denuncia, comunicándolo el enlace policial por medio telefónico, sin perjuicio de la posterior remisión escrita al Ministerio Público.
- k) El/la coordinador/a que el Ministerio Público designe para esta materia en cada localidad atenderá todas las consultas referidas a hechos constitutivos de violencia intrafamiliar y comunicará por escrito las órdenes que en cada caso se consideren procedentes, sin perjuicio de adelantarlas telefónicamente.
- l) Los/as agentes de la unidad especializada, y, preferentemente el enlace policial de la estación, mantendrán comunicación permanente con la víctima, a fin de ofrecerle apoyo, protección, y conocer cualquier incidencia que acontezca. Estas se pondrán en conocimiento del Ministerio Público por medio telefónico o por escrito en función de la urgencia de la comunicación.

a) Contenido del reporte policial

70.- En este caso, el informe policial se limitará a reflejar:

- La hora de la llamada o comparecencia de la presunta víctima de violencia
- La petición que expresa y las manifestaciones que vierte, reflejándolas de forma exhaustiva

- La información que se le ofrece
- La descripción de su situación tanto física como emocional
- El traslado, en su caso, al centro médico
- El informe médico entregado o la negativa a efectuarlo
- El acompañamiento prestado para la interposición de la denuncia
- Las medidas de seguridad adoptadas
- Las circunstancias familiares que se conozcan, así como las anteriores intervenciones que se hayan llevado a cabo con esa pareja o familia
- Las gestiones que se hayan desarrollado, derivadas de las anteriores.
- Las comunicaciones que se hayan efectuado tanto con el Ministerio Público como con otras instituciones.

4.A.c) Valoración Del Riesgo

71.- La importancia que el legislador ha atribuido a las medidas de protección la deducimos de las modificaciones que para incrementar las mismas encontramos en las reformas legales, tanto de la Ley 38 del año 2001, como en el Código Procesal y, por último, en la Ley de Femicidio.

72.- La Ley 38 fue la primera Ley en establecer en su artículo 4 unas medidas concretas para proteger a las víctimas de violencia doméstica, autorizando a la autoridad, tanto a ordenar al presunto agresor a que desaloje la casa que comparte con la víctima con independencia de quien sea el propietario de la misma, como a radicar provisionalmente en un domicilio diferente del común para protegerla de agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio. En la misma Ley se reguló la posibilidad de suspender al presunto agresor, la guarda y custodia de sus hijos menores, las visitas a los mismos o a impedir que estos pudieran salir del país.

73.- La Ley 63 de 2008, al promulgar el nuevo Código Procesal Penal, amplió las medidas de protección de las víctimas, de forma que, además de las anteriores, básicamente recogidas en el artículo 331, reguló en el artículo 332 la posibilidad de ordenar que las personas protegidas sean conducidas, o incluso se les facilite la salida del país y la residencia en el extranjero cuando las medidas antes señaladas sean insuficientes para garantizar su seguridad. Pero la principal novedad se halla en el establecimiento, en el artículo 333, de unas medidas especiales de protección para las víctimas de los delitos de violencia doméstica como el desalojo de la casa mientras dure el proceso, la orden de que se utilice el brazalete electrónico, la suspensión del manejo de armas, la prohibición de acercarse al agresor al domicilio de la víctima o su lugar de trabajo, o la protección policial especial.

74.- La Ley 82 del 2013 (Ley de Femicidio) ha modificado el artículo 333 del Código Procesal Penal para ampliar la previsión referida a la orden de portar por parte del presunto agresor un brazalete electrónico, conminándolo a que durante la tramitación del proceso penal no se acerque a la víctima a menos de doscientos metros. La víctima

portará un receptor y, en caso de incumplimiento de la orden, se podrá ordenar la detención policial del presunto agresor en cualquier momento del proceso.

75.- La elección de la medida con la que se vaya a proteger a una mujer víctima de violencia intrafamiliar debe responder al nivel de riesgo en que aquella se encuentre. Por ello, la valoración del riesgo es fundamental para elegir adecuadamente las medidas.

76.- Los cuerpos policiales y los agentes receptores de denuncias del Ministerio Público, que han estado en contacto con la víctima, el presunto agresor, los testigos y las evidencias son piezas claves en la determinación del concreto riesgo que padece cada víctima. El Ministerio Público llevará a cabo la valoración de riesgo, antes de fijar las medidas adecuadas, y al determinarlo tomará en especial consideración la valoración policial del riesgo realizada siguiendo el formulario incluido en el anexo I del presente Protocolo.

77.- La coordinación en esta materia resulta muy beneficiosa para las víctimas. Por ello los agentes enviarán, unida al reporte policial, la valoración del riesgo y, en caso de ser necesario, se pondrán en contacto con el Ministerio Público tanto por vía telefónica como por correo electrónico, para comunicar cualquier precisión referida a la misma. La misma vía utilizará el Ministerio Público para solicitar las precisiones que requiera sobre la valoración policial antes efectuada.

78.- Para valorar el riesgo deben tomarse en cuenta una serie de indicadores relativos a la víctima y al presunto agresor, que a continuación se detallan. A cada indicador se le atribuye un valor a asignar por la persona encargada de realizar la valoración, de 0 a 3 (0-Sin riesgo, 1-Nivel bajo, 2-Nivel medio, 3-Nivel alto), y en función de la valoración final se concluirá si el riesgo de sufrir una nueva agresión es bajo, medio o alto.

79.- Para realizar la valoración adecuadamente, debe completarse el mayor número posible de apartados, ya que, de efectuarla parcialmente, los resultados pueden ser imprecisos y no se protegerá correctamente a las víctimas.

80.- La valoración del riesgo será objeto de reevaluación si se cometieran nuevas agresiones y, en cualquier caso, cada seis meses.

a) Datos de interés para la valoración del riesgo

81.- Los datos relevantes que deben recabarse, con carácter previo, para con posterioridad poder valorar el riesgo son los siguientes:

1. En relación con el presunto agresor y la víctima

- Filiación de la persona o personas maltratadas.
- Domicilio y teléfono. Estos datos serán conservados con la debida cautela.

- Filiación y datos del presunto agresor o agresores.
- Relación familiar existente.
- Tiempo de convivencia o de relación. En caso de matrimonio, el régimen económico de la pareja, y si hay proceso iniciado de separación o divorcio así como si existen hijos comunes.
- Profesión y situación laboral del presunto agresor.
- Situación económica del mismo, así como de la víctima.
- Tipo de vivienda, en el caso de ser común: en propiedad o en alquiler, así como la situación geográfica de la misma: en comunidad o aislada.
- Descripción del temperamento del presunto agresor.
- Estado de salud, adicciones o tratamientos médicos o psiquiátricos del presunto agresor.
- Lugares que frecuenta.
- Armas que posea.

2. En relación con los hechos

- En caso de tratarse de varios hechos, tratar de establecer un relato cronológico.
- Fijar la fecha y lugar de los hechos.
- Determinar los posibles motivos de la agresión.
- Establecer el tipo de maltrato: físico, sexual o psicológico.
- Medios utilizados
- Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados.
- Existencia de anteriores medidas de protección o de sentencias.
- Testigos que puedan corroborar los hechos.

Tras recabar estos datos, y con carácter urgente, se consultará en el Gabinete de Archivo e Identificación de Personal de la Dirección de la Investigación Judicial, la existencia de antecedentes de detención y/o de condena del presunto agresor.

b) Instructivo para completar el formulario de valoración del riesgo

82.- Tras recabar los datos anteriormente mencionados, es preciso llevar a cabo una valoración de las circunstancias que concurren, y de esta forma se determinará el nivel de riesgo, que se calificará de alto, medio o bajo.

83.- A fin de unificar los criterios de valoración, se ha optado por cuantificar el riesgo con un sistema de puntos de 0 a 3. En consecuencia, se atribuirá la puntuación en función de la intensidad del riesgo.

84.- El/la agente de policía deberá valorar con 0, 1, 2, o 3, el nivel de riesgo existente, según la información anteriormente mencionada. En los supuestos en los que no se aprecie riesgo alguno, se asignará un 0; cuando la intensidad sea baja, un 1; y en el caso de estimarse media o alta, un 2 o un 3, respectivamente. En la mayoría de los

casos se permite valorar con amplitud entre el 0 y el 3, pero hay supuestos excepcionales en los que se reduce la opción al tratarse de circunstancias que no deben influir tanto en el resultado final.

85.- La suma de los puntos asignados determinará el nivel de riesgo, estimándose que hasta 9 puntos será bajo, entre 10 y 23, medio, y a partir de 24, alto.

86.- El formulario de valoración permite realizar observaciones por parte del agente. Se deberán referir situaciones no mencionadas en el formulario y que se estimen de interés transmitir al estar vinculadas con la situación de riesgo, así como al resultado de la valoración que se ha llevado a cabo.

87.- A continuación se describen, de forma orientativa, algunas de las situaciones de mayor riesgo, que en el caso de concurrir, conllevarán la puntuación correspondiente a un alto riesgo.

1. Relación entre la víctima y el agresor

Situaciones de mayor riesgo:

- Cuando la víctima comunica su decisión de separarse.
- Cuando el presunto agresor ha iniciado una nueva relación de pareja.
- Cuando se ha producido un embarazo no deseado por el agresor.
- Cuando existe alta conflictividad respecto a la custodia de los hijos en los trámites de separación o divorcio.

2. Temperamento y perfil del agresor

Situaciones de mayor riesgo:

- Cuando el presunto agresor es adicto a las bebidas alcohólicas o sustancia estupefacientes.
- Cuando el presunto agresor presenta una enfermedad mental, o antecedentes de ingresos psiquiátricos.
- Cuando el presunto agresor posee armas y las maneja con habitualidad.
- Cuando el presunto agresor haya empeorado drásticamente su situación económica o perdido su trabajo.
- Cuando ha sido condenado con anterioridad por delitos de violencia contra la misma u otras mujeres.
- Cuando haya sido condenado por agresiones a menores o personas vulnerables del entorno familiar.
- Cuando el presunto agresor haya quebrantado con anterioridad, medidas de protección impuestas por la autoridad competente.

3. Tipo de violencia

Situaciones de mayor riesgo:

- Cuando se hayan producido ataques dirigidos a causar la muerte o lesiones graves.
- Cuando se hayan empleado instrumentos peligrosos: armas de fuego, cuchillos, palos...
- Cuando se hayan producido agresiones sexuales.
- Cuando la intensidad de las agresiones haya aumentado.
- Cuando las agresiones se produzcan en presencia de los hijos.
- Cuando se han vertido amenazas de muerte reiteradas.

4. Vulnerabilidad de la víctima

Situaciones de mayor riesgo:

- Cuando la víctima presenta dependencia psíquica de su agresor.
- Cuando la víctima manifiesta su deseo de retirar la denuncia, tanto en esta como en ocasiones anteriores, así como en los casos de flagrancia en los que manifiesta no desear denunciar.
- Cuando la víctima dependa económicamente de su agresor.
- Cuando la víctima se haya enferma.
- Cuando la vivienda familiar se haya aislada.
- Cuando la víctima carece de apoyos familiares o amigos que le presten ayuda.

88.- Teniendo en cuenta estos criterios, se rellenará el formulario de valoración adjunto como anexo nº 1.

4.A.d) Medidas cautelares y de protección

89.- Tras la adopción de las medidas cautelares, conviene efectuar su seguimiento y velar por el cumplimiento de las mismas, para lograr la efectiva protección de las víctimas.

90.- A tal fin, el Ministerio Público comunicará por escrito al enlace policial de la estación o zona policial donde reside la víctima, las medidas que tanto el Fiscal como el Juez de Garantías hayan adoptado para garantizar su cumplimiento, el mismo día en el que se acuerden.

91.- En las zonas en las que se hayan constituido Unidades de Policía Preventiva Comunitaria, estas serán las encargadas de efectuar el seguimiento de las medidas. En el resto de las zonas, y hasta tanto se creen las mismas, asumirán esta función, las unidades especializadas en violencia intrafamiliar o, en su defecto, los agentes que hayan recibido capacitación específica.

92.- El Ministerio Público podrá ordenar a los servicios policiales la vigilancia de la víctima y su acompañamiento. En función del riesgo establecido se podrá acordar:

- En caso de riesgo alto: vigilancia durante 24 horas.
- En caso de riesgo medio: vigilancias frecuentes y acompañamientos puntuales.
- En caso de riesgo bajo: facilitación de contacto telefónico.

93.- Si el Ministerio Público o el Juez de Garantías acuerdan el desalojo del presunto agresor, los/as agentes procederán a ejecutarlo tan pronto como reciban la comunicación escrita en la que se ordene la medida.

94.- Si la medida adoptada es la colocación de un brazalete electrónico con receptor en la víctima, los/as agentes facilitarán a la misma un teléfono de contacto durante 24 horas. En caso de incumplirse la prohibición de 200 metros y previa llamada de alerta de la víctima, los/as agentes de policía acudirán con inmediatez y, en su caso, procederán, de ser un hecho flagrante, a la detención provisional del infractor y su posterior traslado ante el Ministerio Público.

95.- Cuando se acuerde la retirada de armas del domicilio o la suspensión de su uso, los/as agentes procederán a su ejecución, dando cuenta a la Dirección de la Investigación Judicial, para que conste en los archivos de la Sección de Permisos de Armas de Fuego. Así mismo, en el caso en el que el presunto agresor deba portar armas debido a su puesto de trabajo, bien por pertenecer a las fuerzas públicas, bien por desarrollar su labor en el ámbito de la seguridad privada, se informará a su superior jerárquico de los hechos en los que se ha visto implicado.

96.- Si la medida acordada es el sometimiento del presunto agresor a terapias psicológicas o psiquiátricas, y la Policía tenga conocimiento de su inasistencia, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público mediante comunicación escrita que llevará a cabo el/la agente enlace de la estación policial al coordinador/a del Ministerio Público.

97.- El Ministerio Público podrá acordar estas medidas, aun cuando la víctima haya expresado su deseo de no denunciar o se haya retractado de su denuncia, si estima, a través de la valoración de riesgo aportada por los agentes policiales o por la que haya apreciado a través de la denuncia, que existe un riesgo para su vida o integridad física.

98.- Si los/as agentes de policía reciben nueva información que afecte a la medida cautelar, lo pondrán en conocimiento inmediato del coordinador/a del Ministerio Público, por comunicación escrita, salvo que la urgencia del caso exija la comunicación telefónica. Si las circunstancias de las que tienen conocimiento afectan a la valoración del riesgo inicialmente efectuada, procederán a elaborar una nueva, aunque no haya transcurrido el plazo de seis meses.

99.- En caso de que los/as agentes observen el quebrantamiento de las medidas de protección, siendo un hecho flagrante, procederán a la aprehensión del presunto agresor conforme a lo dispuesto en el artículo 233 del Código Procesal Penal, y lo conducirán de inmediato ante el Ministerio Público.

4.B. La dirección de la investigación

100.- Conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal, *"los organismos de investigación actuarán en todo el territorio de la República, bajo la dirección del Ministerio Público, en la investigación de los delitos y la determinación de los autores y partícipes, para lo cual reunirán los elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos"*. Según el artículo 78 del mismo cuerpo legal *"La fuerza policial y los organismos de investigación cuando actúen en la investigación de un proceso penal, como auxiliares del Ministerio Público o de los tribunales, efectuarán las diligencias bajo su dirección y acatarán las ordenes"*. El artículo 289 del mismo Código añade que *"Los organismos de investigación deben cumplir sin dilación las ordenes de averiguación o de comisiones específicas que les impartan los agentes del Ministerio Público, en adicción a las establecidas en su respectiva Ley Orgánica"*.

101.- Conforme a lo legalmente previsto la investigación de los delitos requiere de la existencia de un equipo de investigación en el que la dirección de la misma corresponde al Ministerio Público y el auxilio a la fuerza policial. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como los cuerpos de policía firmantes del presente Protocolo se comprometen, para el buen éxito de la investigación, a mantener y promover mecanismos de comunicación entre ambas que aseguren la fluidez y eficacia de la investigación.

102.- Una vez iniciada la investigación de oficio, o mediante la interposición de una denuncia o de una querella, el objetivo será determinar si existen fundamentos para la presentación de una acusación avalada por elementos suficientes de convicción.

103.- A partir de la denuncia o querella, o del reporte policial recibido, el Ministerio Público tomará declaración a la víctima en la forma descrita en el apartado 4.A.b. de este Protocolo, solicitando en su caso la práctica de la prueba anticipada que evite la revictimización de la misma, y establecerá la teoría del caso, acordando la práctica de las diligencias que estime oportunas.

104.- A tal efecto podrá ordenar, comunicándolo por escrito, a la Dirección de Investigación Judicial o a los servicios de policía habilitados en funciones de policía de investigación judicial, la práctica de las siguientes diligencias:

- a) La identificación del presunto autor. Los auxiliares de la investigación tendrán en cuenta que el estado de inocencia del investigado obliga a guardar reserva en

cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito hasta que se formule la imputación.

- b) La aprehensión del mismo, si estima que concurren elementos de riesgo para la víctima. En este caso se conducirá al aprehendido ante el Ministerio Público con inmediatez, a fin de que sea presentado ante el Juez de garantías en el plazo de 24 horas.
- c) La inspección del lugar de los hechos. Esta diligencia la efectuará directamente el/la Fiscal, sin perjuicio de que, antes de su llegada, los agentes policiales deban custodiar las evidencias del delito, preservando los objetos y rastros. El/la funcionario/a a cargo de la inspección dejará constancia escrita de los/as participantes en dicha diligencia, así como en soporte tecnológico describiendo el estado de los lugares y de las cosas.
- d) Averiguar la identidad de los testigos, y en el caso de hallarse en el lugar de los hechos, asegurar que los testigos no se comuniquen entre sí, no se retiren o ausenten sin haber proporcionado la información relativa a su identidad personal, domicilio y número telefónico, así como la versión de los hechos presenciados, de lo que se dará cuenta al Fiscal.
- e) Custodiar los locales o las casas privadas en los que se tenga conocimiento de la comisión de un delito sin ingresar en estos hasta que el Ministerio Público obtenga la autorización del Juez de Garantías, salvo en los casos en los que el titular del inmueble o domicilio autorice expresamente la entrada. Se excepcionan los casos flagrantes, y aquellos en los que se haya comunicado al Fiscal el riesgo para la vida o la integridad física de la víctima, en cuyo caso este podrá ordenar el allanamiento sin previa autorización judicial, aunque la diligencia será sometida al control del Juez de Garantías en las 48 horas siguientes, quien valorará si la intervención se hallaba motivada. En este caso se evidencia de nuevo la importancia que tiene la correcta valoración del riesgo que aprecian los/as agentes policiales y le transmiten al director de la investigación.
- f) Realizar labores de vigilancia cuando el/la Fiscal considere conveniente vigilar un lugar o un edificio para evitar la sustracción de instrumentos, papeles, libros o cualquier otra cosa objeto de la investigación, así como para evitar la fuga de un sospechoso respecto del que todavía no se acordado su aprehensión o solicitado su detención.
- g) Acordar la incautación de instrumentos, dinero, valores y bienes empleados en la comisión del delito o que sean producto de este, siempre que resulten convenientes para la investigación. Se exceptúan las comunicaciones escritas y notas remitidas entre el imputado y su defensor o las personas que pueden abstenerse de declarar como testigos, así como los resultados de exámenes o diagnósticos relativos a las ciencias médicas realizados bajo secreto profesional, siempre que no guarden relación con el objeto de la investigación.
- h) Acordar la incautación de correspondencia epistolar, telegráfica u otros documentos privados, acompañándola de la correspondiente autorización judicial, salvo que se estime que hay peligro de pérdida de evidencia, en cuyo caso, el/la Fiscal

puede ordenar su incautación sin autorización judicial, presentándolo con posterioridad, en el plazo de 48 horas al control del Juez de garantías para que valore la motivación y pertinencia de la incautación. Solo la comunicación fluida entre el Ministerio Público y el/la agente policial permitirá realizar con éxito este tipo de diligencias, ya que la falta de entendimiento puede conllevar desde la pérdida de la evidencia, hasta su anulación en el procedimiento.

- i) Grabar comunicaciones previamente autorizadas por el Juez de Garantías a instancia del Ministerio Público. Cuando el/la Fiscal dicte esta orden, el/la agente encargado/a deberá guardar secreto acerca de su contenido, salvo que, citado posteriormente como testigo, se le requiera para responder sobre ello. Posteriormente el/la agente realizará la transcripción y la presentará al Ministerio Fiscal, quien decidirá la parte que deba incorporarse al acta por guardar relación con el caso investigado, sin perjuicio de conservar el soporte digital guardado bajo una cadena de custodia.
- j) Acordar el examen corporal al imputado o al ofendido por el hecho punible, a cuyo efecto ordenará el traslado al lugar adecuado donde se tomen las muestras biológicas, así como que se proceda a la extracción sanguínea o cualquier otra que no suponga menoscabo para la salud o la dignidad de la persona. En el caso de que la persona, tras ser informada de sus derechos, consienta en la práctica de la prueba, el /la Fiscal lo ordenará sin más trámites. En caso de negativa, se solicitará autorización del Juez de Garantías, salvo que exista peligro de pérdida de evidencia por la demora, en cuyo caso el/la Fiscal instará con posterioridad, aunque con inmediatez, la citada autorización. Cuando la decisión de proceder a una intervención corporal se refiere a una víctima menor de edad o que adolezca de incapacidad, el consentimiento deberá prestarse por escrito, bien por la propia víctima o por su representante legal.
- k) Aunque no sea previsible que tenga lugar en este tipo de delitos, el/la Fiscal puede ordenar a los/as agentes policiales que lleven a cabo una operación encubierta con infiltración en una organización, vigilancia y seguimiento de personas con el propósito de recabar evidencias que permitan determinar la ocurrencia del hecho punible, así como sus actores y partícipes, debiendo someter el Ministerio Público estas diligencias en el plazo de 10 días al control del Juez de Garantías. La constante comunicación y consulta de cada paso que se dé entre el/la directora/a de la investigación y el/la agente policial será determinante para el éxito de la investigación.
- l) Acordar la conducción de un testigo que no comparezca voluntariamente. Toda persona requerida durante la investigación por el Ministerio Público estará obligada a comparecer y decir la verdad de cuanto conozca y sea preguntado. Si la persona citada no compareciera sin justa causa, podrá el Ministerio Público ordenar su conducción por los agentes policiales.
- m) Así mismo, el Ministerio Público podrá acordar la comparecencia del imputado cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos o para llegar a los acuerdos permitidos en la legislación, en los mismos términos que el párrafo

anterior. La comparecencia del imputado se llevará a cabo asistido de letrado y tras la lectura de derechos.

- n) Acordar la práctica de diligencia de reconocimiento de una persona. El reconocimiento deberá hacerse colocando al que deba ser reconocido, entre al menos seis personas, por lo que el/la agente que auxilie en la investigación deberá preparar a seis personas que presenten rasgos físicos parecidos a ella.
- o) Ordenar la práctica de un reconocimiento fotográfico. A tal efecto se prepararán por parte del Servicio de Criminalística, un número no menor de diez fotografías de las existentes en los archivos actualizados de identificación del organismo de investigación, y el reconocimiento se llevará a cabo ante el/la Fiscal, levantando acta junto con la fotografía del imputado reconocido, y la firma de quienes participen en ella, incluido el defensor o la persona en quien haya este delegado.

105.- Una vez finalizada la investigación, el Ministerio Público decidirá pedir el archivo, si no ha conseguido las evidencias suficientes, o formulará acusación. En los delitos de violencia de género no están permitidas las formas alternativas al proceso, de conciliación y/o mediación.

106.- En caso de acordarse el sobreseimiento, deberá comunicarse a la víctima esta decisión, a fin de que pueda esta mostrar su pretensión de continuar el proceso y ejercer imputación. En el caso de que no desee ejercer acusación o no se estimase la misma y se acordase el sobreseimiento y el cese de las medidas cautelares, se le notificará tanto a ella como a los agentes que en su caso estuvieran encargados de su protección. Dicha notificación se realizará por comunicación escrita remitida al enlace de la estación policial.

4.C. Formulación de la acusación

107.- Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio público al imputado, presentará al Juez de Garantías la acusación, requiriendo la apertura del juicio.

108.- El/la Fiscal, con carácter previo a la presentación del escrito de acusación, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima, que así lo hubiere solicitado.

109.- En el escrito de acusación, al presentar el anuncio de la prueba, el Ministerio Público ocultará el domicilio de la víctima para proteger su integridad, fijándose otro domicilio desde el que se le transmita la citación o notificación.

110.- Durante al proceso debe continuar la comunicación del Ministerio Público con la Policía, a fin de velar conjuntamente por la protección de las víctimas. Los/as policías que efectúan el acompañamiento o vigilancia de aquellas, pondrán en conocimiento

del Fiscal cualquier incidencia, sin perjuicio de su actuación inmediata en caso de flagrancia.

111.- El Ministerio Público, bien por decisión propia, bien porque los agentes de policía que garantizan las medidas de protección de la víctima le transmitan la existencia de un riesgo elevado, podrá solicitar que el juicio no tenga carácter público y se realice total o parcialmente de forma cerrada. Así mismo podrá instar que la víctima no sea fotografiada por los medios de comunicación.

112.- El/la Fiscal podrá solicitar que los/as agentes que procedieron a la aprehensión del acusado y efectuaron las actuaciones básicas presten declaración en calidad de testigos.

4.D. Finalización del proceso

113.- El proceso finalizará por sentencia. En caso de ser absolutoria, el Tribunal ordenará el cese de las medidas cautelares. Esta decisión debe ser comunicada, por escrito, a la víctima y a los/as agentes que se encargan de su protección, en el mismo día en el que se tenga conocimiento.

114.- En caso de dictarse sentencia condenatoria, se mantendrán las medidas de protección de la víctima, si se estima necesario. A tal efecto se comunicará, de igual modo, la resolución a los/as agentes que se encarguen de su vigilancia.

115.- El Ministerio Público deberá tener en cuenta la valoración de riesgo existente para la víctima con carácter previo a emitir el dictamen sobre la suspensión de la condena, y en caso de duda, solicitar, a través del enlace policial, que la unidad policial especializada lleve a cabo la actualización de la que en su día elaboró.

116.- Cuando se produzca la excarcelación de los condenados, el Ministerio Público lo comunicará por escrito dirigido al enlace policial, y a la víctima, a los efectos oportunos.

5. Compromisos necesarios para la viabilidad del protocolo

117.- La puesta en marcha de este Protocolo conlleva unos compromisos institucionales:

A. La especialización y capacitación

118.- El Ministerio Público debe continuar el camino de la especialización iniciado y crear Fiscalías de Familia en todos los Distritos, dotándolas del personal adecuado y con capacitación continua desde la perspectiva de género. Además se facilitará formación en este sentido a personeros, corregidores y a todos los agentes del Ministerio Público.

119.- Los mandos policiales procurarán la creación de unidades especializadas en materia de violencia intrafamiliar en todas las estaciones de policía, para que se encarguen de todos los asuntos de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, y en tanto no sea posible, procederán a la capacitación del mayor número de unidades posibles, incluyendo formación específica en materia de género, de técnicas de investigación de delitos sexuales y femicidios, así como de instrumentos e indicadores de valoración de riesgo. También se procurará la creación de Unidades de Prevención Comunitaria que se encargarán del control de las medidas de protección.

B. Un esfuerzo de coordinación

120.- A fin de alcanzar un mayor nivel de coordinación entre ambas instituciones será preciso crear las figuras de Coordinador de Violencia sobre las mujeres en el ámbito intrafamiliar, en cada oficina del Ministerio Público, y de Enlace Policial en esta misma materia en todas las estaciones policiales, a fin de que asuman la comunicación constante en este ámbito.

C. El Registro de Agresores y de Condenados

121.- El conocimiento de estas circunstancias es fundamental en la valoración de riesgo que soporta cada víctima de violencia de género y en la correcta determinación de

las medidas de protección más adecuadas. Por ello se impulsará la creación del Registro al que se refiere el artículo 14 de la Ley 69 de 27 de diciembre de 2007, que crea la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, y se facilitará su acceso a todos los representantes del Ministerio Público.

D. Informatización

122.- Los programas informáticos son herramientas muy útiles para llevar a cabo el seguimiento de los expedientes de violencia sobre las mujeres, al permitir que no solo el encargado inicial de un caso pueda acceder a la documentación contenida en el mismo, de forma que ante cualquier incidencia, como puede ser una nueva agresión, o un quebrantamiento, otro representante del Ministerio Público o el Fiscal de turno, puedan adoptar con inmediatez la medida que proceda.

123.- Así mismo es un instrumento eficaz en el seguimiento de las medidas de protección que facilitará a los agentes el control de las medidas al poder incluir las alertas que se consideren oportunas.

124.- Por ello ambas instituciones deberán impulsar la implantación de programas informáticos en sus respectivas sedes, que además de los beneficios mencionados permita la confección de estadísticas para poder cuantificar los delitos que realmente se están cometiendo en el ámbito intrafamiliar, los expedientes iniciados, las acusaciones presentadas, las medidas adoptadas y las condenas recaídas.

E.-Dotación de medios materiales

125.- La sensibilización que esta materia conlleva un esfuerzo económico, por lo que deberán dotarse a ambas instituciones de los medios materiales necesarios. Todas las instalaciones deben tener espacios adecuados para proteger la intimidad de las mujeres víctimas de delitos, y por ello desde la Procuraduría General y desde el Alto Comisionado se instará su cumplimiento.

6. Seguimiento y evaluación del protocolo

126.- A fin de efectuar el seguimiento de este Protocolo el Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer (CONVIMU), que entre las funciones asignadas en el artículo 20 n° 4 de la Ley 82 (Femicidio) se encuentra la de dar seguimiento a la coordinación institucional, se reunirá, de forma ordinaria, con esta finalidad, con la periodicidad que se establezca en su Reglamento interno, sin perjuicio de poder convocarse a instancia de cualquiera de sus miembros para debatir y evaluar una circunstancia urgente que afecte a alguna o algunas de sus instituciones y que no convenga demorar hasta la próxima convocatoria.

127.- El Comité podrá invitar a sus reuniones a personas o Instituciones que consideren oportuno si todos sus miembros muestran su conformidad.

128.- El Comité elaborará un informe acerca del seguimiento del presente Protocolo.

Anexo I. Formulario de valoración del riesgo contra la víctima de violencia de género

VÍCTIMA:.....

Nº DE CÉDULA O PASAPORTE:

FECHA:.....

1.- Por favor, señale la puntuación, conforme al baremo indicado, sobre cada uno de los indicadores, tomando en cuenta las fuentes de las que haya recibido la información y la intensidad con que estima la concurrencia de cada indicador.

2.- Respecto a las FUENTES tome en cuenta las manifestaciones de las víctimas, declaraciones de testigos y familiares, impresiones de los agentes intervinientes, inspección ocular en el lugar de los hechos, reportes médicos, informes periciales, antecedentes del presunto agresor...)

3.- Respecto a la INTENSIDAD, debe asignar a cada indicador un valor en la escala de 0 a 3, considerando que 0 se atribuirá en los casos en que no concurre el indicador, 1 si la intensidad es baja y 2 o 3 cuando la intensidad es media, o alta. En la mayoría de las casillas, la puntuación oscila de 0 a 3, pero hay supuestos excepcionales en los que se establece una menor opción al tratarse de circunstancias que no deben influir tanto en el resultado final.

4.- La valoración es siempre aproximativa, sin embargo en caso de que NO esté de acuerdo con la valoración resultante, marque en el cuadro inferior el nivel de riesgo que Ud. considere más adecuado al caso, justificando su valoración personal. Sólo podrá incrementar el nivel de riesgo, nunca disminuirlo. Las medidas de protección y/o cautelares a adoptar o solicitar serán acordes al nivel de riesgo resultante del cuadro anterior, excepto en caso de que su valoración personal incremente el riesgo, en cuyo caso se adoptarán y solicitarán las medidas correspondientes a su valoración subjetiva.

5.- En todo caso, el formulario ha de ser completado por persona que haya mantenido entrevista personal con la víctima y analizado todas las fuentes existentes.

I. Datos del presunto agresor y de la víctima		Valoración
1.- Falta de arraigo: Pertenencia de la víctima y/o del presunto agresor a comunidad indígena o a una minoría, es persona migrante o desplazado/a		0 a 1
II. Relación entre víctima y presunto agresor		Valoración
2.- La víctima está recientemente separada, o está en trámites de separación		0 a 2
3.-. Existe acoso reciente a la víctima o se incumple la prohibición de acercamiento		0 a 2
III. Tipo de violencia ejercida en los últimos 6 meses		Valoración
4.- Existencia de violencia física (valoración en función de la gravedad)		0 a 3
5.- Violencia física en presencia de hijos/as u otros familiares		0 a 2
6.- Aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia		0 a 3
7.- Amenazas graves o de muerte en los últimos meses		0 a 3
8.- Amenazas con objetos peligrosos o con armas		0 a 3
9.- Agresiones sexuales en la relación de pareja		0 a 3
IV. Conducta y descripción del presunto agresor		Valoración
10.- Celos o conductas controladoras de la víctima		0 a 3
11.- Historial de conductas violentas con una pareja anterior		0 a 2
12.- Historial de conductas previas de delitos de violencia física o sexual contra otras personas		0 a 3
13.- El presunto agresor es una persona con acceso y conocimiento en el uso de armas de fuego y/o que trabaja con ellas o porta armas.		0 a 2
14.- Abuso de alcohol o drogas por el presunto agresor		0 a 3
15.- El presunto responsable tiene antecedentes psiquiátricos (internamiento psiquiátrico, medicación por depresión)		0 a 1
16.- Conductas frecuentes de crueldad, de desprecio y falta de arrepentimiento		0 a 3
17.- Justificación de las conductas violentas, por su propio estado, o por provocación de la víctima		0 a 3
V. Vulnerabilidad de la víctima		Valoración
18.- La víctima percibe el peligro de muerte		0 a 3
19.- La víctima ha retirado o intentado retirar denuncias previas, ha reanudado la convivencia o ha renunciado a la protección conferida		0 a 3
20.- Vulnerabilidad de la víctima por razón de la enfermedad, soledad o dependencia psíquica o económica.		0 a 2
Riesgo bajo (1-9) Riesgo Medio (10-23) Riesgo alto (24-48)		
Control de la calidad del formulario		
¿Está Ud. de acuerdo con el resultado de la valoración? Marque opción deseada:		SÍ NO
Si NO está de acuerdo ¿qué resultado le parece más adecuado? Por favor, indíquelo y razone su opinión:		

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

**Protocolo de investigación
de los delitos de violencia contra
las mujeres cometidos en el marco
de las relaciones de pareja
e intrafamiliares**

1. Introducción

1.- La Procuraduría General de la Nación tiene un compromiso firme en la lucha contra la violencia de género. Siguiendo la línea de las políticas públicas del país, ha venido llevando a cabo importantes cambios organizativos y esfuerzos en el trabajo de los/as fiscales para mejorar su tarea de investigación de delitos de violencia contra la mujer, especialmente en el caso de la violencia cometida en el ámbito de las relaciones afectivas y las relaciones intrafamiliares.

2.- Con este objetivo la Procuraduría General de la Nación pretende dotarse de un protocolo de investigación de delitos de violencia contra la mujer, que sirva de guía de unidad de actuación a todos los representantes de la Fiscalía en la mejora de la capacidad de respuesta de la institución, mediante investigaciones más eficaces, una coordinación más ágil con el resto de agentes implicados, especialmente con la Policía¹, y una mejora en la atención prestada a la mujer, víctima del delito.

3.- El presente protocolo se enmarca en el proyecto **“Violencia de género en Iberoamérica: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional” del Programa EUROSocial** de la Comisión Europea, desarrollado en dos fases. En la primera (2013) se promovió la elaboración de instrumentos normativos regionales para favorecer la investigación de este tipo de delitos y la atención a las víctimas del mismo. Específicamente, la Asamblea General de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) aprobó en el mes de noviembre en Ecuador el Protocolo Regional para la investigación desde la perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar. En la segunda fase (2014) se pretende la adaptación del Protocolo Regional a la realidad jurídica de los países participantes, entre los cuales se haya Panamá, representado en el proyecto por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Fruto de dicha tarea será la adopción por el Ministerio Público de Panamá del presente Protocolo de investigación fiscal de delitos de violencia contra las mujeres.

1. A los efectos del presente Protocolo por Policía se entiende los siguientes componentes de las Fuerzas Públicas: Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y a los auxiliares de la Seguridad Pública.

4.- A los efectos de este Protocolo se entiende por violencia contra las mujeres, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, siempre que se cometan el marco de una relación de pareja, hayan o no cohabitado, o cohabiten. Incluye también en su ámbito de aplicación los actos de violencia contra las mujeres cometidos por miembros de la familia o miembros del mismo hogar por razón de la pertenencia de la víctima al sexo femenino.

5.- El presente Protocolo tiene que como objeto:

- a. Acercar a la mujer víctima de violencia de género en el ámbito intrafamiliar al sistema judicial.
- b. Lograr que la protección de la víctima y de sus hijos sea integral, rápida y eficaz.
- c. Evitar la revictimización de la mujer víctima de violencia de género en el ámbito intrafamiliar y de sus hijos.
- d. Establecer unos criterios compartidos para la mejora de la actuación del Ministerio Público.
- e. Fijar unos criterios para mejorar la coordinación del Ministerio Público con la Policía y otras instituciones que intervengan en la investigación de los hechos.

6.- El Protocolo se enmarca en un momento histórico en el que se está implementando en el país el sistema acusatorio. La convivencia del sistema acusatorio en algunos distritos, el Segundo y el Cuarto, con el antiguo sistema inquisitivo –mixto, que todavía se aplica en los distritos Tercero y Primero, permite ir valorando las bondades del sistema acusatorio y, por otro lado, salvando las dificultades para su implementación.

7.- De acuerdo con ello, la actuación del Ministerio Público debe adaptarse al sistema procesal vigente en cada distrito. El presente Protocolo recoge prácticas diversas, a seguir por los/as Fiscales según el distrito en que desarrollen sus funciones, sin perjuicio de responder en todo caso al principio de diligencia debida en la actuación investigadora y procesal constitucionalmente atribuida.

8.- Del mismo modo, en el marco de los delitos de violencia contra las mujeres objeto del Protocolo la apuesta por el sistema acusatorio impone acometer importantes cambios en la estructura y organización del Ministerio Público así como una mayor dotación de medios materiales y personales que permitan asegurar la presencia física de los/as Fiscales en todas y cada una de las fases del proceso, especialmente en las entrevistas con la víctima, en la presencia en el lugar de los hechos en los delitos graves, en la adopción de medidas de protección, así como en todas las audiencias e impugnaciones ante el Juez.

2. Perspectiva de género

9.- El fenómeno de la violencia contra la mujer no escapa a ningún país. El carácter especial de la víctima constituye al mismo tiempo una dificultad para luchar contra el fenómeno. Por un lado, la vulnerabilidad de la víctima, su situación de inferioridad en la relación derivada de la desigualdad de poderes y la falta de respuesta defensiva de la víctima, hacen que el agresor ejecute su acción sin apenas resistencia de la mujer. Es el convencimiento, en la mayoría de los casos, de verse perdonado por la víctima, bajo el manto de la irreal e insana relación afectiva-amorosa o, en otros supuestos, convencido de su poder amenazante o coactivo sobre la misma, lo que favorece el ilícito.

10.- Por otro lado, precisamente en el contexto de la relación de afectividad o en el ámbito familiar, en el sentido más amplio del término, es donde se ejecutan la mayoría de los actos de violencia contra la mujer. Este marco hace que la investigación de estos delitos sea especialmente compleja y difícil. La clandestinidad, que por lo general proporciona la intimidad del domicilio, y los factores que dificultan romper una relación de maltrato por la mujer, propician que la víctima no siempre sea persistente, sino incluso contradictoria en su devenir procesal.

11.- De todos estos problemas relacionados con la perspectiva de género debe hacerse cargo el sistema de justicia penal, con el fin de adoptar las mejores prácticas para la atención a la víctima y su protección. La persecución del delito contra la mujer en el seno de las relaciones interfamiliares ha de ser pública. La identificación de las estrategias de investigación en casos difíciles, como por ejemplo, aquellos en que no se han causado lesiones físicas a la víctima o aquellos en que no existen testigos y en los que la víctima no quiere colaborar, incluso retractándose de su propia denuncia, no pueden llevar de inmediato al cese de la investigación fiscal, al desistimiento o al archivo provisional. Es un reto que debe orientar la investigación: buscar con más detalle y profundidad, con apoyo en estrategias institucionales, la verdad material de lo ocurrido y propiciar la imputación penal en los casos en que ello sea posible.

12.- La Fiscalía ha de ser sensible a la perspectiva de género. En consecuencia:

- a. Debe fomentar la formación y capacitación de todos los operadores jurídicos que a lo largo de la investigación trabajan en la atención a la mujer víctima.
- b. La actuación del Ministerio Público debe ir dirigida a evitar la revictimización de la víctima. Revictimización que puede tener su origen en dos tipos de riesgo:
 - Riesgos derivados de la condición de víctima de un delito, ya sea la posibilidad de reiteración de la conducta punible, o los riesgos derivados de su participación en el proceso penal, puesto que puede ser intimidada o amenazada para que no preste testimonio en el juicio así como los peligros asociados a su situación de vulnerabilidad y de cercanía con el agresor. Es la llamada victimización primaria.
 - Riesgos derivados de su participación en el sistema judicial penal, primordialmente al tener que comparecer en reiteradas ocasiones ante el sistema, siendo obligada a narrar una y otra vez su maltrato y sus vivencias negativas con las consecuencias perniciosas que ello puede acarrear en una persona ya de por sí vulnerable, entre otros, dificulta que la mujer víctima pueda reestablecerse, al interferir en su eventual terapia psicológica; obstaculiza el empoderamiento de la víctima; provoca la pérdida de confianza de la víctima en el sistema judicial y entorpece su participación y colaboración con la investigación criminal. Por ello se adoptarán las cautelas necesarias para evitar la reiterada declaración de la víctima. Es la denominada victimización secundaria.
- c. La víctima mujer ha de convertirse en el centro de investigación y su protección, el pilar de proceso.
- d. Los procedimientos de violencia contra la mujer han de ser preferentes y su tramitación exenta de dilaciones improcedentes. Con ello, solo se logra ineficacia y retractaciones. El tiempo obliga a las mujeres a tomar conciencia de lo que han dicho y de las consecuencias que ello puede acarrear al denunciado o imputado. Al haber transcurrido algunos meses desde la primera declaración, se hace necesario de pronto, rescatar al agresor de la cárcel o anular el riesgo de acabar en ella, alegando la víctima alguna excusa, a veces baladí, fabricada por la presión de terceros, sean hijos u otros parientes, o por el propio conflicto emocional de la víctima. Por ello es necesario:
 - Mejoras técnicas y optimización de los recursos.
 - Mejor coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y otras instituciones.
 - Profundizar y agotar todas las vías de investigación.
 - Mayor precisión en la valoración del riesgo y la adopción de las más adecuadas medidas de protección para cada caso.
 - Promover el control y seguimiento de las medidas de protección.
 - La existencia de registros que faciliten el acceso a la información necesaria para actuar con eficacia y corrección en la protección de la víctima.

3. Antecedentes legislativos

3.1. Ámbito internacional

14.- En la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres los/as Fiscales deberán tomar en consideración las normas y acuerdos internacionales adoptados por Panamá, en particular:

- a. Declaración Universal de los derechos humanos, Asamblea General de la ONU, resolución 217, de diciembre de 1948.
- b. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981.
- c. Cuarta conferencia mundial de Beijing: la Declaración de Beijing ; la Plataforma de Acción; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 10 de diciembre de 1999, ratificada en Panamá a través de la ley 17 de 28 de marzo de 2001.
- d. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), aprobada en Panamá mediante ley 15 de 28 de octubre de 1977.
- e. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belem Do Pará, aprobada el nueve de junio de 1994 por la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA).

3.2. Marco normativo nacional

15.- En los acuerdos de la Acción de Beijing, se adoptó la introducción de sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales o reforzar las ya vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, en el hogar, en el lugar de trabajo, o en la sociedad.

16.- La República de Panamá ha realizado en el ámbito penal un esfuerzo importante que ha culminado con la reciente Ley 82, que tipifica el delito de femicidio y la violencia

contra la mujer, pero que fue iniciado con las siguientes normas a aplicar por los/as Fiscales:

- a. Ley 27, 16 de junio de 1995, que introdujo por primera vez una normativa que tipificaba el delito de violencia doméstica y el maltrato al menor de edad, como delitos de acción pública.
- b. Ley 38, 10 de julio de 2001, que reformó e introdujo algunos artículos tanto en el Código Penal como en el Código Judicial en materia de violencia doméstica y maltrato al niño, la niña y el adolescente. Esta ley destaca por el conjunto de medidas de protección con las que se amplía el ámbito anteriormente existente, incluye dentro del concepto sujetos pasivos de la violencia doméstica a la pareja sentimental sin convivencia que no ha cumplido los cinco años de relación con finalidad de permanencia, también a las personas que hayan procreado entre sí a un hijo-a; a los hijos-menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia, y además extiende al ámbito de violencia doméstica a las acciones delictivas aun cuando la relación afectiva haya finalizado en el momento de la agresión.
- c. Ley 63, de 28 de agosto de 2008, que incorpora nuevas medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos.

17.- Los/as Fiscales adoptarán las cautelas oportunas para la debida aplicación de la recientemente aprobada Ley 82, de 24 de octubre de 2013, que tipifica el delito de femicidio y la violencia contra la mujer. Esta Ley tiene como objetivo garantizar el derecho de las mujeres de cualquier edad a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.

18.- La Ley afirma que se protege a la mujer por el hecho de ser mujer, en un contexto de relaciones desiguales de poder, en el ámbito público o privado y en cualquier tipo de relación, ya sea laboral, docente, académica, comunitaria o de cualquier índole (art.2 de la Ley).

19.- El Legislador panameño define lo que ha de entenderse por violencia contra la mujer, en todos y cada uno de los ámbitos, el judicial, el afectivo, el docente educativo, en los ámbitos públicos y privados de salud, el comunitario, en el ámbito de la integridad sexual y corporal, en el institucional, en el laboral y salarial, en el médico, en el psicológico, en el simbólico y en la protección a la vida introduciendo el delito de femicidio.

20.- Esta Ley resuelve la controversia tan importante que se planteó a raíz de la Ley 38, cuando al definir la violencia doméstica, en su artículo segundo, hacía referencia a un patrón de conducta, que exigía la reiteración de la fuerza física o de la violencia

sexual o psicológica. La eventual exigencia de un patrón de conducta permitía interpretar a un sector de la jurisprudencia panameña, la exclusión de los delitos de violencia contra la mujer, cuando nos encontrábamos ante actos violentos aislados o solo se pudiera probar uno, pese a la existencia de antecedentes de violencia previos contra la mujer. Con esta nueva legislación, se suprime la necesidad de acreditar un previo patrón de conducta violento del varón para perseguir cualquier acto de violencia.

21.- La Ley de Femicidio introduce en el Código Penal, por un lado, figuras delictivas nuevas y, por otro, agrava otras ya existentes cuando los hechos se cometan contra la mujer o en el marco de las relaciones internas familiares.

22.- Se tipifican como delitos nuevos:

- a. El femicidio, artículo 132-A.
- b. El hostigamiento no sexual contra un miembro de la familia, artículo 200. Estructurado como un delito de maltrato habitual. Son formas de comisión del mismo las intimidaciones, chantajes, acoso, persecución, coacción, amenazas, humillaciones, exigencias de obediencia debida, vejaciones, aislamiento y cualquier conducta semejante que produzca una alteración en la vida cotidiana y la paz de la relación familiar o afectiva, así como una alteración psicológica de la víctima.
- c. En el artículo 214-A recoge, dentro de los delitos contra el patrimonio, la violencia económica contra la mujer.
- d. Finalmente, dentro del capítulo VIII del título XII del libro Segundo del Código Penal, se tipifica por primera vez, el delito de quebrantamiento de las medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un proceso penal, en el artículo 397-A.

23.- Se agravan ciertas conductas delictivas ya tipificadas, cuando el hecho se cometa con violencia contra una mujer:

- a. Inducción al suicidio mediante el maltrato, artículo 135 párrafo segundo.
- b. Lesiones cualificadas por su resultado, previstas en el artículo 137, se sancionan con mayor pena si se produce el acto como derivación de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer.

24.- Además de la legislación específica en la materia, los/as Fiscales deberán aplicar en la sanción de estos delitos las siguientes normas:

- a. Constitución Política de la República.
- b. Ley 16, de julio de 1991, que crea el centro de recepción de denuncias.
- c. Ley 31, de 28 de mayo de 1998, de protección a la víctima del delito.

- d. Ley 17, de 28 de marzo del 2001, sobre el protocolo relativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.e. Plan Nacional contra la violencia doméstica y formas de convivencia ciudadana, 2004-2014.
- f. Ley 16 de 2004, que dista disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modifica y adiciona artículos al código penal y judicial.
- g. Ley 14, 18 de mayo de 2007, Código Penal de la República de Panamá.

4. Inicio de la investigación²

25.- El conocimiento de la noticia criminis puede obtenerse por diversas vías:

- a. Por denuncia de la víctima ante la autoridad competente, sea Ministerio Público, Centro de Recepción de Denuncias, Personería o Corregidor/Regidor.
- b. Por informe o reporte policial, sea por delito flagrante o denuncia previa.
- c. Por informes médicos de sospecha.
- d. Por manifestación espontánea de la víctima, pese a no querer denunciar, o por denuncia de tercera persona.

26.- Cualquiera que sea el medio de puesta en conocimiento el Ministerio Público actuará con la diligencia debida en la investigación y persecución de delito, así como en asistencia y protección de la víctima.

4.1. Denuncia ante el Ministerio Público

27.- El/la Fiscal debe proceder a la investigación de los hechos aunque la denuncia sea anónima o interpuesta por tercera persona.

28.- La actuación del Ministerio Público se ajustará al sistema procesal vigente en cada distrito, ya sea el sistema acusatorio o el sistema inquisitivo-mixto.

4.1.1. Distritos donde rige el sistema acusatorio

29.- En los distritos donde rige el sistema acusatorio los/as Fiscales deberán adoptar las siguientes buenas prácticas:

- Cuando la víctima llega al edificio del Ministerio Público, deberá pasar un control para su identificación y exponer de forma genérica el motivo de su denuncia. Cuando

2. Para conocer la actuación policial durante la instrucción de los delitos objeto de este Protocolo, como la coordinación de la Policía con el Ministerio Público, deberá consultarse el Protocolo de Coordinación Ministerio Público-Policías

la denuncia a interponer sea de violencia contra la mujer, inmediatamente se avisará al fiscal competente en el asunto, y si estuviéramos fuera de los horarios de atención al público, al fiscal de turno de familia.

- Si la víctima estuviera herida será trasladada por agentes del Ministerio Público o de cualquiera de los servicios de seguridad pública competentes al centro de salud para su atención. El parte médico se unirá la denuncia.
- Con el fin de evitar la revictimización, la denuncia debe ser realizada directamente ante el/la Fiscal, quien estará acompañado por el/la funcionario/a receptor/a de la denuncia. La víctima narra, sólo una vez, su vivencia y el contenido de los hechos. Posteriormente el/la receptor/a redactará la denuncia.
- En la declaración de la víctima ante el/la Fiscal, se le debe informar de sus derechos, investigar todas las formas de violencia que pueda haber sufrido la mujer a lo largo de su relación de afectividad (sea física, patrimonial, psicológica, sexual) y concretar todos los principios de prueba que puedan obtenerse, conforme al apartado 6 del presente Protocolo relativo a la declaración de la víctima.
- La víctima deberá ser examinada por la Unidad de Atención y Prevención a las víctimas que, con carácter prioritario en estos delitos, emitirá el correspondiente informe de valoración de riesgo. Se facilitará a la Unidad la denuncia prestada por la víctima a fin de no volverle a tomar declaración sobre los hechos vividos, centrándose la entrevista en los aspectos concretos y necesarios. En la Unidad se le informará por escrito de los servicios civiles que podrán prestarle apoyo y acompañamiento (conforme al anexo I del presente Protocolo). En los casos más graves, donde se evidencie debilidad y dependencia sentimental de la víctima, deberá comunicarse por el/la psicólogo/a o el/la trabajador/a social a la Defensoría Pública, a los efectos de poder encargarse del acompañamiento de la víctima.
- Si la víctima mostrara síntomas de un estado psicológico alterado o dañado, antes de la interposición de la denuncia, deberá de ser examinada por la Unidad de Atención y Prevención, a fin de calmar y atender a la víctima.
- Si la víctima hubiera sufrido lesiones, el/la Fiscal ordenará que se oficie al Instituto de Medicina Legal (IMEL) para que la examine y emita el correspondiente informe de sanidad, secuelas padecidas y la relación causa-efecto con los hechos denunciados. En el informe deberá hacerse constar:
 - Descripción de las heridas causadas, mecanismos de producción, tratamiento médico o quirúrgico a seguir y, en su caso, deformidades producidas.
 - Si fuera posible, determinará la evolución de las heridas y/o contusiones respecto del día de la producción del hecho, indicación del pronóstico de curación o los días que ha precisado para su sanidad e incapacidad, secuelas físicas y psíquicas y en su caso, prejuicios estéticos.
 - Estado emocional y los posibles daños causados a la salud mental como consecuencia de la vivencia de esos hechos.
 - Manifestaciones de la víctima al facultativo sobre la forma de causación de las lesiones.
 - Fotografías que muestran las lesiones padecidas, siempre que la víctima preste su consentimiento informado y se estime necesario para la objetivación del daño.

- En supuestos de lesiones graves, deberá indicarse si la zona afectada contiene órganos vitales, grado de afectación de los mismos y el riesgo de fallecimiento.
- Si padeciera lesiones psicológicas, también se oficia al Instituto de Medicina Legal (IMEL) para la valoración pericial psicológica, su sanidad, secuelas, tratamiento médico o psicológico seguido o a seguir y relación causa-efecto con los hechos denunciados.
- El/la Fiscal deberá adoptar las medidas de protección más efectivas para garantizar la protección de la víctima frente a la reiteración de hechos iguales o semejantes, al amparo del artículo 52 de la ley 82, de 24 de octubre de 2013, y conforme a lo dispuesto en el apartado 8.1. del presente Protocolo. La resolución que contenga la medida de protección deberá ser notificada en el acto a la víctima.
- El/la Fiscal deberá ordenar inmediatamente al agente de enlace³ o a la Policía Nacional (regular) que proceda a la localización del presunto agresor y le conducirá ante el/la Fiscal competente a fin de notificarle, en persona, las medidas de protección que ha de cumplir. Junto con la notificación se le requiere del estricto cumplimiento de las medidas de protección, bajo el apercibimiento de poder incurrir en delito de quebrantamiento de medida de protección.
- Si el agresor se pusiera en fuga o paradero desconocido, el/la Fiscal podrá pedir su aprehensión, a los efectos de realizar la notificación de la medida, su requerimiento y el apercibimiento por un delito de quebrantamiento.
- A la víctima se le entregará la carta de los derechos que le han sido informados, la resolución que contenga la eventual medida de protección acordada y los teléfonos del Ministerio Público para recibir la información que necesite.
- El Ministerio Público debe garantizar el derecho de la víctima a participar en la investigación y en el proceso, así como a conocer el curso de las actuaciones. El/la fiscal competente deberá informar a la víctima de los pasos procesales relevantes que se vayan produciendo, así como aquellos que puedan afectar a la seguridad y protección de la misma. Entre otros, la detención, aprehensión provisional o puesta en libertad del agresor, la formulación de una imputación formal, la finalización del procedimiento, su archivo, si puede ser reabierto la causa, si se ha remitido oficio al juez de familia o si es viable la acción civil...
- El/la Fiscal procederá a registrar en la plataforma informatizada el expediente que ha nacido como consecuencia de la interposición de la denuncia. Se colgará el acta de la denuncia, la resolución de las medidas de protección y, en su caso, la notificación a las partes y la información pertinente en orden a la identificación de las partes y antecedentes previos. Esto último, junto con cualquier dato relevante, puede anotarse en la pestaña o apartado llamado "Observaciones".

3. AGENTE DE ENLACE: A fin de lograr una eficaz coordinación entre el Ministerio Público y la Policía, en la fase de investigación del delito, se nombrará en cada estación policial, entre los miembros que formen parte de las unidades especializadas, o en su caso, y hasta que ello sea posible, entre los de mayor capacitación en violencia contra la mujer, un agente que sirva, en cada caso, de **enlace**, que se encargará de mantener comunicación directa con el Fiscal de Familia o agente encargado del Ministerio Público que le corresponda según el zona, tanto en relación con las actuaciones de investigación, como respecto del seguimiento de las medidas de protección.

4.1.2. Distritos donde rige el sistema inquisitivo-mixto

30.- En los distritos donde aún está en vigor el sistema inquisitivo-mixto, el/la Fiscal competente, ya sea en horario de atención al público o a través de la Fiscalía de turno, seguirá las siguientes prácticas:

- Si la víctima acude a la Fiscalía de familia para denunciar un delito de violencia contra la mujer, el/la secretario/a de la fiscalía deberá, de forma preferente, entrevistarse con la víctima e informarle de los derechos previstos en la carta o estatuto de la mujer maltratada que recoge el artículo 14 de la Ley 82 de femicidio.
- En dicha entrevistas, el/la secretario/a de la Fiscalía también informará a la víctima de las consecuencias del proceso que se va a iniciar y su derecho a participar en el mismo, así como de la dispensa de la denuncia contra su esposo o pareja conviviente, conforme al apartado 6 del presente Protocolo relativo a la declaración de la víctima. Si finalmente la víctima, tras narrar los hechos, manifiesta que no quiere denunciar, el/la secretario/a levantará acta en la que se contendrá la información que le ha transmitido y la pondrá disposición del Fiscal competente.
- Si la víctima manifiesta su intención de denunciar, el/la tramitante, en presencia del secretario/a, procederá a recibir la denuncia, declarando la víctima una sola vez.
- Son de aplicación las mismas consideraciones establecidas en el sistema acusatorio y en la declaración de la víctima, en orden a la formulación de preguntas que conduzcan a determinar la correcta valoración del riesgo, las medidas de protección solicitadas, la información del curso del proceso y de garantizar su participación en el mismo, la asistencia del intérprete, información sobre los servicios civiles y el informe de la oficina de atención a la víctima.
- La denuncia se pondrá en conocimiento del fiscal competente, que examinará las medidas de protección propuestas por el/la secretario/a, confirmándolas y, en su caso, ampliándolas. Se procederá a la notificación de las mismas a la víctima y se harán las gestiones, a través de la policía, para la notificación de las medidas al agresor.
- La denuncia se anotará en el correspondiente libro de registro y en el sistema informatizado, dependiente de la Dirección Informática. El libro de registro sólo permite obtener información respecto de los expedientes de cada Fiscalía, si bien la Dirección Informática se nutre de todas las Fiscales de la nación. En caso de duda sobre antecedentes previos, el/la Fiscal se comunicará por vía telefónica con la Fiscalía competente para obtener información más rápida y veraz.
- Se adjunta como Anexo II del Protocolo modelo de denuncia, válido para cualquier sistema procesal y para cualquier agente o representante del Ministerio Público que recepcione la denuncia.

4.2. Denuncia ante el Centro de Recepción de Denuncias (CRD)

31.- Los Centros de Recepción de Denuncias son dependencias de la Procuraduría General de la Nación con competencia para la recepción de denuncias. Sin embargo, en materia de violencia contra las mujeres y con el fin de evitar la revictimización de la víctima, el Ministerio Público adoptará las medidas oportunas para asegurar que la denuncia formulada por la víctima sea recogida, de forma preferente, por el/la fiscal competente para conocer del asunto.

32.- Desde el punto de vista de la competencia de los Centros de Recepción de Denuncias, dicho compromiso tiene diferente trascendencia en los distritos donde opera el sistema acusatorio de los del sistema inquisitivo-mixto.

4.2.1. Distritos donde opera el sistema acusatorio

33.- En los distritos donde opera el sistema acusatorio, puesto que el Centro de Recepción de Denuncias se encuentra junto a las oficinas del Ministerio Público, cuando una mujer manifieste su intención de formular denuncia por delito de violencia de género, deberá ser inmediatamente remitida al Fiscal competente para que proceda, junto al tramitador/a, a recibir la denuncia.

34.- La valoración del riesgo será realizada por la Unidad de Prevención y Atención a la víctima referida en el apartado 5, y podrá seguir el modelo de valoración del riesgo del Anexo III del Protocolo.

4.2.2. Distritos donde opera el sistema inquisitivo-mixto

35.- Se procurará que el Centro de Recepción de Denuncias haga expresamente la distinción entre las denuncias por delitos contra la mujer en el ámbito de las relaciones familiares, de las del resto de delitos. A tal efecto, existieran dos ventanillas en la recepción del centro. Una, para los delitos de violencia de género, y otra, para el resto de delitos. Ello permitirá dar carácter preferente a los delitos de violencia contra la mujer y evitará que la misma tenga que esperar algunas horas antes de ser atendida.

36.- El primer contacto que tiene la víctima es con un/a funcionario/a que la ayuda a rellenar un formulario básico, donde constan los datos de identificación de la víctima y del agresor. En este trámite, se evitará que la víctima narre los hechos.

37.- En el formulario se hará constar datos relativos a la fecha, hora y lugar del hecho, la identidad y cédula de la víctima, identificación y cédula del presunto agresor, en caso de flagrancia, si hay o no detenido y la voluntad de la víctima de interponer una denuncia, querrella u otro. El/la funcionario/a deberá expresar con carácter genérico el tipo de delito, en este caso de violencia contra la mujer.

38.- La víctima deberá ser derivada directamente a la Oficina de Atención a la Víctima mediante la entrega del formulario inicial que servirá de oficio para que la Oficina pueda comenzar a trabajar.

39.- Tras su paso por la oficina de atención a la víctima, ésta debe de ser atendida por el/la receptor/a de la denuncia.

40.- El/la receptor/a de la denuncia deberá tomar la declaración desde la perspectiva de género, de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del Protocolo sobre la declaración de la víctima.

41.- El Centro de Recepción de Denuncias deberá dotarse de un formulario básico para la denuncia, la valoración del riesgo y principios de prueba fundamentales para realizar una investigación completa. Ver el modelo de denuncia del anexo II de este Protocolo.

42.- El/la receptor/a propondrá las medidas de protección necesarias. Para ello contará con la valoración de riesgo, al menos inicial, que ha realizado la Oficina de Atención a la Víctima.

43.- El/la delegado/a ejecutivo/a del área judicial, posteriormente, supervisa las medidas y firma la resolución donde se adoptan las mismas.

44.- Se deberá garantizar el derecho de la víctima de violencia contra la mujer a la adopción inmediata de la medida de protección oportuna. Para ello el Centro de Recepción de Denuncias deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la resolución y firma inmediata de la decisión adoptada, bien por el/la Delegado/a ejecutivo/a del área judicial o por persona que le sustituya en horario nocturno o en horas de descanso. En ningún caso se podrá hacer esperar a la víctima en el CRD hasta que la resolución sea firmada por el/la delegado/a o enviarla a su casa para que regrese al día siguiente, con el fin de notificarle la resolución.

45.- El CRD adoptará las medidas necesarias para asegurar la remisión del expediente al Fiscal de familia dentro de las 36 horas desde la interposición de la denuncia. El expediente deberá incorporar el informe forense, elaborado por el IMEL, y la valoración inicial del riesgo de la Oficina de atención a la víctima, junto con la denuncia y la medida de protección adoptada. Para ello el CRD deberá realizar las gestiones para asegurar la remisión del expediente completo en el plazo señalado.

46.- De las medidas de protección se dará cuenta al Corregidor/a o a la Policía de la zona, para que proceda a la notificación de las mismas al denunciado y, en su caso, al desalojo de la vivienda.

47.- El Centro de Recepción de Denuncias deberá estar dotado de registro informático para conocer los antecedentes previos de la víctima y del agresor.

4.3. Denuncia ante la Personería

48.- La Personería es una dependencia del Ministerio Público que permite acercar el sistema de justicia a las víctimas que viven en zonas más remotas. Opera de igual forma en los distritos del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo-mixto.

49.- Se procurará mantener las Personerías ubicadas próximas a la Policía y a los juzgados municipales.

50.- Los/as personeros/as, como miembros integrantes del Ministerio Público, deberán tomar la denuncia de la víctima, realizar la entrevista y adoptar las medidas de protección. Notificarán la resolución acordada a la perjudicada en el acto y localizarán rápidamente al agresor, a través de las unidades de policía de la zona. El/la personero/a notificará al presunto agresor las medidas acordadas, con requerimiento de su cumplimiento y apercibimiento de incurrir en delito de quebrantamiento.

51.- Si la víctima llamase a la policía como consecuencia del delito de violencia sufrido, los/as agentes de cualquiera de los servicios de seguridad pública competentes la trasladarán a la Personería para formular la correspondiente denuncia.

52.- En la recepción de la denuncia, y en las demás actuaciones que tengan que practicar con la víctima, se tendrán en cuenta todos los criterios fijados para la toma de la declaración de la víctima en el apartado 6, así como el modelo de denuncia del Anexo II del presente Protocolo.

53.- Los/as personeros/as son competentes para realizar la valoración del riesgo, para ello podrán servirse del modelo del Anexo III del Protocolo.

54.- Si la víctima necesitara asistencia sanitaria, los empleados de la Personería la trasladarán al centro sanitario más próximo, a fin de prestarle la atención requerida. El parte médico se unirá a la denuncia.

55.- Si la víctima precisara asistencia psicológica o social, el personal de la Personería avisará telefónicamente a la Oficina de Atención a la Víctima más próxima al territorio de la Personería. El/la psicólogo/a y/o trabajador/a social se trasladarán inmediatamente, en el día, para prestar el servicio necesario.

56.- Si los hechos ocurrieran en un territorio dentro del ámbito geográfico de la Personería pero alejado del lugar donde ésta se ubica, el/la personero/a deberá trasladarse al lugar de los hechos, donde se entrevistará con la víctima y adoptará las medidas adecuadas.

57.- El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias para garantizar la formación inicial y continua del personal de las Personerías en violencia contra las mujeres y perspectiva de género.

58.- Además del registro informático a través de la plataforma informática, las Personerías llevan un registro manual por el número de incoación del expediente.

59.- En las Personerías del sistema acusatorio existe la plataforma informática. El/la personero/a deberá registrar todas las denuncias, así como todas las medidas de protección adoptadas, de conformidad con los criterios y pautas para su registro.

4.4. Denuncia ante la Corregiduría y/o Juzgado nocturno

60.- La Corregiduría y el Juez nocturno son autoridades administrativas, ajenas al sistema judicial, que dadas las características geográficas de Panamá y la existencia de población de difícil acceso, permiten acercar a la población el sistema judicial. Los corregidores existen en todos los núcleos de población e incluso, en aquellos remotos y pequeños, existe la figura del regidor.

61.- Serán los/as corregidores/as, y en su caso, los/as regidores/as, así como los jueces nocturnos, quienes recibirán la denuncia que realicen las víctimas de violencia contra la mujer.

62.- Con el fin de facilitar su tarea y promover un sistema único en el país, el Ministerio Público deberá realizar las gestiones necesarias para facilitar que las Corregidurías y los Jueces nocturnos se sirvan de los modelos de denuncia que se acompañan en el anexo II y de valoración de riesgo del anexo III del presente Protocolo.

63.- Si procediera la adopción de medidas de protección, se deberá poner inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público más próximo a la Corregiduría o al Juez nocturno, a través de la Policía.

64.- La comunicación se realizará vía fax o a través de correo electrónico, donde los hubiere y siempre que así lo permita el ordenamiento jurídico. Con ello el Ministerio Público tendrá conocimiento de la denuncia y de la solicitud de medidas. De la manera más rápida y dentro de las 24-48 horas desde la recepción de la denuncia, el representante del Ministerio Público procederá a dictar la resolución de adopción de medidas, las cuales se pondrán en conocimiento del corregidor por la misma vía. El corregidor y/o el Juez nocturno notificarán la resolución a la víctima y al denunciado, auxiliándose para ello de la policía a su mando asignado.

65.- Si la comunicación no pudiera realizarse vía fax o por correo electrónico, deberá utilizarse el sistema de comunicación de la zona para casos de emergencia.

66.- Todos los actos de investigación se realizarán por la unidad de policía existente en la zona, actuando bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público más próximo. El representante del Ministerio Público deberá trasladarse en el plazo razonable a la zona correspondiente, si fuera necesaria su presencia.

4.5. Llamada de la víctima a la policía. Delito flagrante

67.- Otra forma de obtener la noticia criminis es por la llamada de la víctima o de tercera persona a la policía, al estar produciéndose en ese momento el delito o tras la comisión del mismo.

68.- Las unidades de policía regular o nacional se trasladarán, de manera inmediata, al lugar de la comisión de los hechos. Si la víctima se encontrase en un lugar remoto respecto a la unidad de policía, se solicitará el auxilio a otras autoridades con el fin de llegar con la mayor rapidez al lugar de los hechos.

69.- La actuación de la Policía en el lugar de los hechos con la víctima, el agresor y el aseguramiento de la zona, se realizara como se indica en el Protocolo de coordinación.

70.- De dicha actuación policial se redactará el correspondiente parte o reporte policial, cuyo contenido se especifica en el Protocolo de Coordinación, y se entregará al Fiscal competente.

4.6. Informe de sospecha

71.- Si la víctima acude primero a un centro hospitalario, y ante el/la facultativo/a narra que ha sido víctima de un delito de violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones intrafamiliares, el/la facultativo/a debe extender un informe de sospecha.

72.- El informe de sospecha reflejará las lesiones por las que ha sido atendida la víctima, el tratamiento a seguir y la causa que ha producido las lesiones, tal como refiere la víctima.

73.- Si la víctima se negara a narrar al facultativo/a cómo se causaron las lesiones, o la versión ofrecida es incompatible con las heridas que está curando, el/la facultativo/a, en caso de concluir que estamos ante una agresión y no ante un accidente o lesiones autoinflingidas, deberá igualmente emitir el informe de sospecha.

74.- El informe de sospecha deberá remitirse en el menor plazo posible a la Fiscalía de familia, no debiendo exceder el plazo de 24 horas.

75.- El informe de sospecha permite al Fiscal actuar de oficio, dando inicio a la investigación del hecho.

4.7. La víctima no quiere denunciar

76.- Si la víctima después de comparecer ante el Ministerio Público, el CRD o la Policía, decide no denunciar, puede acogerse a este derecho, conforme al Art. 83 del Código Procesal Penal. Nadie está obligado a denunciar a su esposo o conviviente.

77.- En todo caso, la autoridad competente para la recepción de la denuncia deberá:

- a. Informar a la víctima de los derechos que la asisten y los recursos disponibles para su protección.
- b. Investigar, en la medida de lo posible, los motivos por los que la víctima no quiere denunciar.
- c. Si la víctima de manera espontánea, o antes de cambiar su voluntad de no denunciar, ha narrado lo sucedido o parte de lo acaecido, se deberá redactar por parte del Fiscal o del CRD un "informe de conocimiento del hecho" y por parte de la policía un "informe policial" en el que se recogerán los hechos manifestados por la víctima. Dicho informe se remitirá al Fiscal competente para conocer del delito. El informe permitirá al Fiscal actuar de oficio al encontrarnos ante delitos de acción pública.

5. La Oficina de Atención a Víctimas y la Unidad de Prevención y Asistencia a la Víctima

78.- La Oficina de Atención a las Víctimas y la Unidad de Prevención y Asistencia a la Víctima son dependencias del Ministerio Público encargadas de la valoración del riesgo.

79.- La Oficina de Atención a la Víctima opera en el ámbito de aplicación del sistema inquisitivo-mixto y la Unidad de Prevención y Asistencia en el ámbito del sistema acusatorio.

80.- En el presente Protocolo, toda referencia a la Oficina de Atención a la Víctima es de aplicación a la Unidad de Prevención y Asistencia

81.- La Oficina de Atención a la Víctima tiene la siguiente estructura y funcionamiento:

- a) Unidad de asistencia psicológica: Deberá estar atendida por psicólogos/as. El/la psicólogo/a, si fuera necesario, calmará y tratará que la víctima se relaje, proporcionándole atención psicológica de urgencia.

La entrevista psicológica debe evaluar la situación emocional de la víctima, las posibles consecuencias psicológicas por el delito sufrido, potenciar su autonomía personal y, si fuera necesario, realizar la coordinación con otros profesionales terapéuticos y recursos sanitarios, como por ejemplo, elaborar los correspondientes oficios para que se practique la valoración médica y/o psicológica por los forenses del IMEL. En estos casos los peritos deben contar con una copia de la denuncia, para poder emitir una valoración causa-efecto con los hechos denunciados, tener todos los antecedentes necesarios y evitar que la víctima vuelva a contar lo sucedido.

La Unidad psicológica dará a la víctima toda la información necesaria en orden a la importancia de la denuncia, el alcance de la misma y los servicios civiles con los que puede contar.

La entrevista se centrará en la valoración de riesgo. Para ello se incidirá especialmente en la situación de dependencia emocional y económica de la víctima respecto del presunto agresor. Será preciso que se investigue sobre antecedentes

previos de maltrato, denuncias previas u otros antecedentes violentos. A tal efecto se incluye en Anexo III formulario de valoración del riesgo.

La Unidad psicológica deberá remitir al receptor/a de la denuncia la valoración inicial de riesgo realizada, aunque el informe definitivo, que deba emitir la Oficina, no pueda concretarse en ese momento, por ejemplo, porque es necesario incorporar el informe social.

Si de la evaluación realizada por la Oficina de Atención a la víctima se concluye que por el delito de violencia contra la mujer se ha puesto la vida de la víctima en inminente peligro, se elaborará el correspondiente oficio dirigido al Instituto Nacional de la Mujer (IMANU) para que sea evaluada y se le conceda albergue en una casa de acogida junto con sus hijos/as.

- b) Unidad de asistencia social: corresponde a los/as trabajadores/as sociales quienes, a requerimiento de la unidad de asistencia psicológica, deberán realizar en el terreno un estudio de la situación personal, familiar, laboral, económica y social de la víctima. Informan y orientan a la víctima. Se coordinarán con servicios como el Departamento de asistencia legal gratuita para víctimas del delito del órgano judicial, cualquier otro organismo que brinde asistencia legal gratuita o la Defensoría Pública, para que realicen el empoderamiento y acompañamiento necesario durante el procedimiento penal a aquellas víctimas especialmente vulnerables que lo necesiten.

Si la víctima presentara signos de violencia física que requirieran ser atendidos médicamente, deberá ser trasladada por el/la trabajador/a social al centro hospitalario correspondiente para que sea curada. En caso de delito de agresión sexual será igualmente trasladada para que sea explorada y se le facilite la profilaxis necesaria. Si el delito cometido es una posible violación, deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del fiscal y del forense para que se trasladen al centro hospitalario a realizar las primeras diligencias de investigación, como por ejemplo, la toma de muestras, garantizar la cadena de custodia, las manifestaciones espontáneas de la víctima o una entrevista.

El parte médico de la asistencia sanitaria deberá ser unido a la denuncia.

- c) Unidad de asistencia legal: deberá ser atendida por profesional del derecho. Tiene como función transmitir a la víctima la información y asesoramiento jurídico sobre sus derechos, las fases del proceso y su previsible participación, la denuncia y sus consecuencias y la acción civil de resarcimiento. Igualmente asesora sobre las medidas de protección existentes y le auxilia en la solicitud de las medidas más adecuadas a su situación personal. Si fuera necesario, motivará a la víctima para que colabore en la búsqueda de principios de prueba y, si fuera necesario, la coordinación con la red institucional de apoyo (anexo I).

6. La declaración de la víctima y su contenido

82.- La autoridad competente para recoger la denuncia deberá actuar con perspectiva de género, adoptando todas las cautelas para evitar la revictimización. Para ello:

- a. El personal de los servicios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público (personal de vigilancia, personal de oficina...) deberá contar con formación especializada en atención a víctimas de violencia de género.
- b. Las víctimas de violencia de género recibirán atención de forma inmediata y prioritaria.
- c. La autoridad sea policial o fiscal establecerá un buen contacto con la víctima, empleando la empatía, la escucha activa, una posición cercana y respetuosa. Se procurará una acogida cálida, utilizando un lenguaje sencillo y directo, evitando términos jurídicos o tecnicismos.
- d. La entrevista deberá celebrarse en lugar reservado, sin interrupciones, garantizando la privacidad de la misma. Los espacios serán diseñados a fin de facilitar el acceso a las víctimas, evitando el contacto con los agresores, así como con espacios de espera cálidos y que permitan la estancia protegida y segura de los niños, niñas o adolescentes que puedan acompañarles.
- e. La autoridad deberá auxiliar a la víctima, examinar con ella el problema objetivamente, no minimizar ni dramatizar, ayudándole a la toma de decisiones.
- f. El/la Fiscal o el/la receptor/a de la denuncia ayudará a la víctima a la sistematización y puesta en orden de la información facilitada.
- h. Se valorará en cada caso la oportunidad de tomar declaración a la víctima de forma inmediata. En todo caso, es aconsejable que la víctima relate los hechos de forma libre, pueda desahogarse y después se proceda a sistematizar la información. No debe interrumpirse a la víctima en su relato y finalmente hacer las concreciones y aclaraciones precisas.
- i. Deberá estimularse la denuncia como acción que se emprende para romper una relación abusiva. Se debe entender el estado emocional de la víctima y no juzgar su decisión en caso de no querer presentar denuncia o en el caso de retirarla posteriormente. Se evitarán comentarios culpabilizadores o minimizadores del acto de violencia.
- j. Cuando se juzgue necesario por el grado de afectación de la víctima, ésta podrá ser acompañada en las diligencias de denuncia por personal de la Oficina de atención a la víctima.

- k. En la entrevista que tendrá el/la fiscal con la víctima, se debe investigar todas las formas de violencia que pueda haber sufrido la mujer a lo largo de su relación sentimental (física, patrimonial, psicológica, sexual) y concretar todos los principios de prueba que puedan obtenerse, por ejemplo, identificación de testigos presenciales, testigo indirectos (personas de su entorno, como amigos, familiares, compañeros de trabajo... a las que pueda haber contado los hechos o hayan podido ver sus lesiones aunque no la forma en que se produjeron), médicos y/o psicólogos que la puedan haber atendido..., es decir, que permita identificar a las partes, conocer el marco y circunstancias en que se desarrolla la violencia así como los hechos objeto de denuncia. Para su recepción se adjunta en el Anexo II un modelo de formulario de denuncia.
- l. En la declaración se formularán preguntas con la finalidad de determinar el riesgo objetivo. Se procurará expresar de la denuncia la existencia de medidas de protección y/o cautelares ya acordadas vigentes o canceladas, la existencia de previas denuncias, la dependencia de bebidas alcohólicas o drogas por el agresor, posesión o tenencia de armas, antecedentes psiquiátricos del agresor, antecedentes de sentencias por delitos domésticos o cualquier otro hecho delictivo violento, actos agresivos a otros miembros de familia o terceros, si algún hecho se comete con arma, la descripción de la misma, si los hechos se ejecutan en presencia de menores. Es importante la hora de la comisión del hecho y el lugar en que se produce (zona rural, zona indígena o urbana) a fin de determinar si estamos ante una zona caliente.

83.- Antes de iniciarse la formulación de la denuncia se informará y se entregará a la víctima, la carta de sus derechos conforme al artículo 14 de la Ley de femicidio. La carta de derechos deberá ser firmada por la víctima, cuya copia quedará dentro del expediente del Ministerio Público. El original se entregara a la víctima.

84.- A la víctima se le informara de forma expresa que no tienen obligación de denunciar contra su cónyuge o conviviente (art. 83 CPP). Dicha información debe ser recogida en el acta de la declaración se la tome y en el acta que recoge la denuncia.

85.- Asimismo, en el acto de su declaración, constará que se le informa del delito de falso testimonio o denuncia falsa y sus consecuencias penales

86.- La denuncia, cualquiera que sea la autoridad competente para recibirla, deberá incluir extensa información.

87.- Si la víctima fuera extranjera, deberá llamarse al intérprete del idioma en que ella puede comunicarse. Si la víctima viniera acompañada por persona que conociera su idioma y el español, podrá hacer las veces de intérprete. Previamente se le pedirá que presten juramento o promesa de cumplir fielmente el mandato encomendado. Dicha persona costará perfectamente identificada con su cédula en la denuncia y deberá

firmar también la misma. Si no existe intérprete de dicho idioma, y la víctima viene sola, deberá buscarse la colaboración de la Embajada o el Consulado del que sea nacional la víctima, a fin de poder contar con un traductor o persona que pueda realizar esa función.

88.- La denuncia y/o declaración de la víctima siempre tiene que ser firmada por la misma y, si no supiera escribir, por su huella digital o símbolo que la identifique. También deberá ser firmada por todos los que han intervenido en el acto, representante del Ministerio Público e intérprete.

89.- La víctima no podrá ser obligada someterse a una prueba pericial, psicológica o social ni ésta podrá practicarse en presencia de los representantes de la defensa. No puede ser expuesta la víctima de violencia de género y de los delitos derivados de ello a la reconstrucción de los hechos y se garantizara la privacidad de la misma.

90.- Si el abogado de la defensa manifiesta su voluntad de participar en la práctica de la prueba, podrá presentar, con carácter previo, un pliego de preguntas a practicar durante la prueba, o posteriormente, pedir aclaración o complemento de la prueba en aquellos aspectos que considere necesarios.

91.- Sería conveniente, que en todos los centros donde la mujer puede denunciar, existiera un espacio reservado y preparado para la espera y estancia de los hijos menores de las víctimas que acompañan a su madre al denunciar.

92.- En los casos en que el estado de salud psíquica de la víctima así lo aconseje, avalado por un informe pericial psicológico, el Ministerio Público debe intentar ante el Juez de Garantías, que la declaración de la víctima se realice como prueba preconstituida o anticipada. La fundamentación se basará en el perjuicio que para la salud mental de la víctima supondría una reiteración de su declaración posteriormente en el juicio oral.

93.- Se procurará también practicar prueba anticipada en los casos de incapacidad física o enfermedad grave persistente o de imposibilidad física de poder asistir al acto del juicio, como también los supuestos en que la víctima pueda verse imposibilitada a asistir a juicio como consecuencia de la lejanía de su domicilio, la dificultad del transporte o la carencia de recursos económicos suficientes para garantizar su estadía y alimentación durante las sesiones de juicio. En todo caso, la prueba anticipada se practicará conforme a las prescripciones legales que garanticen el derecho a la defensa del agresor.

7. Carta de derechos de la víctima

94.- La Carta de derechos de la víctima constituye el título habilitante de la condición de mujer maltratada. Los derechos recogidos en dicha Carta podrán ser reclamados por la víctima ante los órganos de la administración correspondiente en cualquier punto del país.

95.- La víctima adquiere estos derechos desde el momento que denuncia y se la identifica como víctima. La mujer adquiere la titularidad de sus derechos como víctima y por tanto a partir del momento en que los puede exigir ante la Administración.

96.- Entre los derechos destacan:

- a. Derecho a acceder a la información (artículo 14.2 de la Ley 82). El artículo 32 de la misma Ley establece, entre las obligaciones del Ministerio Público, el deber de dar a la víctima la información integral sobre las instituciones públicas y privadas para su atención. Esta información se debe dar por el propio Fiscal en el momento de la declaración, mediante entrega por escrito del conjunto de derechos que la misma firma. Para ello deben existir en las fiscalías, centros de atención o unidades de asistencia a las víctimas, hojas informativas de las instituciones públicas y privadas de la zona, semejantes a la incluida en el anexo I de este Protocolo.
- b. Derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnico legal gratuita, inmediata y especializada (art.14.3 de la Ley 82), desde el momento que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Este derecho se hace extensivo a los familiares. Para ello los Centros de Atención a la víctima, dependientes del Ministerio Público, deberán contar con una unidad de asistencia legal que prestará esta orientación y asesoramiento jurídico inicial.
- c. Derecho de la víctima a participar en el proceso.
 - Oírla siempre antes de tomar una medida de protección, de su revocación o modificación, antes de llegar a un acuerdo de pena o con cualquier otra forma de finalización alternativa.
 - Se le notificará o comunicará todas las resoluciones del proceso que la afecten o supongan una variación de su posición jurídica en el mismo, y principalmente:
 - En caso de puesta en libertad del agresor, se le comunicará con antelación, si se puede prever o, inmediatamente, para que ella tenga conocimiento y pueda utilizar las medidas de precaución necesarias

- La remisión del oficio al Juez de familia para instar la adopción de las medidas civiles de protección de ella y de sus hijos
- d. Derecho a recibir la atención integral por los servicios públicos y privados de salud, con cobertura suficiente, accesible y de calidad (art. 14.1 de la Ley 82):
 - Los/las fiscales deberán cuidar que la víctima sea atendida por los servicios de salud, ordenando su traslado a los centros sanitarios tras la comisión del hecho, si así lo precisara.
 - En caso de un delito de violación, los/las fiscales procurarán controlar que en el centro sanitario se administren a la víctima los medicamentos precisos para garantizar una correcta profilaxis, a fin de evitar enfermedades de transmisión sexual, SIDA, embarazo... A tal efecto, si fuere necesario, se emitirá por el Ministerio Público oficio al centro sanitario o se implementará el correspondiente acuerdo con la oficina del IMEL, para que sus facultativos faciliten dicha profilaxis o extiendan a la víctima la receta correspondiente para la adquisición de los medicamentos.

8. Valoración de riesgo

98.- La valoración del riesgo ha de ser previa a la adopción de una medida de protección o cautelar.

99.- La valoración de riesgo es fundamental para adoptar la medida de protección adecuada, pues permite determinar la existencia de un riesgo objetivo para la víctima y, por tanto, la probabilidad de ser atacados nuevamente bienes jurídicos, como la vida, la integridad corporal o su patrimonio.

100.- La valoración del riesgo se realiza por la policía, la oficina de atención a la víctima del sistema inquisitivo o las unidades de asistencia y prevención del sistema acusatorio, por el Ministerio Público (ya sea por fiscal, personero o delegado del área jurídica del centro de recepción de denuncias) y, en su caso, por el corregidor.

101.- Cualquiera que sea la autoridad encargada de realizar la valoración del riesgo es preciso que cuente con formación especializada en violencia de género, incluidos aspectos de naturaleza psicológica y sociológica, que permitan valorar debidamente la situación de peligro en que se encuentre la víctima.

102.- El Ministerio Público debería adoptar la medida de protección tras conocer la valoración de riesgo que ha emitido la oficina de atención a la víctima, y si existiere, la unidad policial.

103.- Las oficinas de atención a la víctima, y en su caso las unidades de atención y prevención a víctima deben funcionar las 24 horas, estableciéndose los turnos laborales correspondientes de sus profesionales.

104.- La valoración de riesgo realizada por la mencionada oficina o unidad debe realizarse el mismo día de la interposición de la denuncia. En ningún caso se dejará de atender a la víctima o requerirle para volver otro día.

105.- Si fuera necesario una información complementaria, por ejemplo el informe social, se emitirá un informe provisional del riesgo que deberá comunicarse sin dilación

al Ministerio Público, ya sea de forma oral, por fax o teléfono. Se hará constancia de la comunicación.

106.- Si el informe definitivo de la valoración de riesgo de la oficina de atención a la víctima del centro de recepción de denuncias exige una demora temporal de más de 48 horas, la denuncia con la documentación existente, incluido el informe de avance de valoración de riesgo realizado, se remitirá inmediatamente al fiscal. Cuando dicho informe finalmente se haya emitido se remitirá, por la vía más rápida, al fiscal que conoce de la denuncia.

107.- Si la policía realiza la valoración del riesgo, la misma debe estar unida al informe policial que ha de transmitirse al Ministerio Público. Cualquier revisión de la valoración de riesgo realizada por la Policía debe comunicarse al Ministerio Público competente.

108.- La valoración del riesgo permite instar ante el Juez de familia la adopción de medidas de protección en relación con los hijos/as menores de la víctima, sean comunes o no con el presunto agresor, y con familiares de la víctima.

109.- No obstante, cuando las circunstancias y la gravedad del caso así lo requieran, el personero debe requerir a los integrantes de la oficina de atención a la víctima de la central del Ministerio Público geográficamente más próximo, su colaboración inmediata.

110.- Los elementos o datos para la valoración del riesgo se obtendrán:

- a. De la entrevista que la oficina de atención a la víctima o la unidad de prevención y asistencia la víctima realicen. Se adjunta en el anexo III, formulario para la valoración de riesgo, en el que se recogen ítems a seguir.
- b. De la información obtenida en la declaración de la víctima respecto a las preguntas asociadas al riesgo, referidas en el apartado 6 de este Protocolo, y las reflejadas en el formulario de denuncia y solicitud de medidas de protección del anexo II.
- c. Si la víctima presentara evidentes lesiones físicas, sería conveniente la realización de fotografías, previo consentimiento informado.

111.- Para completar el anexo III, formulario de valoración de riesgo, podrá usarse el instructivo del formulario de valoración de riesgo recogido en el Protocolo de Coordinación del Ministerio Público-Policías.

112.- La valoración de riesgo puede ser objeto de reevaluación o de revisión ante nuevos ataques y a petición de la víctima.

9. La protección de la víctima

9.1. Medidas de protección de la víctima

113.- Tras la reforma operada por la Ley 82, el actual Código Procesal Penal (CPP) recoge un conjunto de medidas de protección para la víctima y su familia en los artículos 224 y ss. CPP y posteriormente, en el artículo 333 del mismo texto, medidas especiales de protección a la víctima de delitos de violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual, maltrato a personas menores de edad, lesiones personales y trata de personas, así como en los delitos donde se pueda ver afectada la seguridad personal de la víctima.

114.- Las medidas de protección deben tener como finalidad garantizar la seguridad de la víctima del delito, disminuyendo el riesgo objetivo existente, evitando la reiteración de conductas iguales o semejantes.

9.1.1. Medidas penales

115.- Las medidas penales a adoptar en los delitos de violencia contra la mujer, principalmente son:

- a. Desalojo del victimario de la vivienda donde habita el grupo familiar independientemente de la titularidad de la misma. Esta medida tiene una duración de un mes prorrogable por meses consecutivos. Los/as fiscales instarán su prórroga de oficio, si persisten las razones de riesgo objetivo por las que se acordó la medida. En otro caso, desde el Ministerio Público se informará a la víctima de la fecha de vencimiento, para que ella solicite la prórroga.
- b. Prohibición de acceso o alejamiento del agresor al domicilio, trabajo, lugar de estudio o cualquier otro donde la víctima desarrolla habitualmente su actividad.
- c. Prohibición de comunicación o contacto verbal o a través de medios tecnológicos, electrónicos y prohibición de cualquier forma de hostigamiento a la víctima.
- d. Protección policial especial a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la vida, integridad física y/o psicológica de la víctima.
- e. Ordenar el reintegro al domicilio, a petición de la víctima, que ha tenido que salir del mismo por razones de seguridad, previa exclusión o desalojo del agresor.

- f. Cuando lo precise, disponer que la víctima reciba tratamiento individual psicológico o psiquiátrico especializado, por el tiempo que sea necesario (art. 333.18 CPP).
- g. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el domicilio común mientras dure el proceso, así como ordenar la incautación de éstas, a fin de garantizar que no se empleen para intimidar, amenazar ni causar daño.
- h. Ordenar la suspensión del permiso de portar armas, mientras dure el proceso. En el caso de que el agresor realice actividades que impliquen el acceso al uso o manejo de armas, además de la suspensión del permiso para portar armas, ordenar a su empleador o superior jerárquico su reubicación laboral, mientras dure el proceso. Dicha orden judicial de reubicación laboral será de obligatorio cumplimiento.
- i. Ingresar a la mujer víctima en una casa refugio o en hogares alternativos con condiciones de flexibilidad, cuando ello fuera necesario.
- j. Ordenar a la Policía Regular el acompañamiento del agresor al domicilio familiar para retirar sus efectos personales.
- k. Ordenar a la Policía regular el acompañamiento de la víctima al domicilio familiar para retirar sus efectos personales, si la mujer ha tomado la decisión de irse a otro domicilio o va a ser trasladada a una casa refugio.

9.1.2. Medidas de naturaleza económica

116.- Las medidas de naturaleza económica son:

- a. Levantar el inventario de bienes muebles del patrimonio familiar, para asegurar el patrimonio común.
- b. Comunicar al Registro Público, a la Oficina de Reforma Agraria o a la autoridad correspondiente, según sea el caso, para que impida la disposición, por cualquier título, del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.

117.- Todas estas medidas se pueden acordar por el Ministerio Público. Cuando se notifican las medidas al agresor ha de ser requerido para su estricto cumplimiento bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de quebrantamiento de medida del artículo 397-A del CP.

9.1.3. Medidas civiles

118.- En todos aquellos procedimientos, en que sea necesaria la adopción de medidas civiles, principalmente si hay hijos/as menores de edad, los/as fiscales están obligados a emitir el oficio correspondiente al Juez de Familia o de la Niñez, indicándole la necesidad de su adopción. Con ello se impulsa el correspondiente procedimiento civil, acelerándose la adopción de las medidas de oficio por el/la juez, sin necesidad de que la víctima inste la incoación del proceso.

119.- Las medidas civiles propias de la investigación de los delitos de violencia contra la mujer son:

- a. Suspender los derechos inherentes a la reglamentación de visitas del presunto agresor, mientras dure el proceso (art. 333.10 CPP)
- b. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los bienes muebles que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo necesario para el uso de la seguridad (art. 333.11.CPP)

120.- En los casos en que proceda, se informará a la víctima de la existencia de medidas de naturaleza laboral, consistentes en ordenar al empleador o superior jerárquico de la víctima su reubicación laboral, por solicitud de esta o/y ordenar, a solicitud de la víctima, su ubicación en un centro educativo distinto.

9.2. Control de las medidas de protección: Unidades de Policía Preventiva Comunitaria

121.- Para que las medidas de protección sean eficaces, han de ser cumplidas. Para garantizar su cumplimiento es necesario su control y seguimiento.

122.- El control y seguimiento de las medidas de protección corresponde al Ministerio Público.

Es necesario un sistema de registro informatizado de las medidas de protección.

123.- Para el control y seguimiento de las medidas de desalojo y alejamiento y prohibición de comunicación, los/as fiscales pueden auxiliarse en las **unidades de policía preventiva comunitaria**. Estas unidades se caracterizan por realizar actuaciones de prevención, además de su función represora. Actúan como policía de proximidad, acercándose al ciudadano cautelarmente, (sin necesidad que se esté o se haya cometido de la comisión de un delito.)

124.- Su funcionamiento y actuación se propone en el apartado 14, sobre condiciones de viabilidad del protocolo.

125.- El quebrantamiento de una medida de protección penal permite valorar la decisión de aprehensión del victimario. Si el quebrantamiento va acompañado de otro u otros actos violentos contra la víctima debe ordenarse la aprehensión.

10. Víctimas especialmente vulnerables

10.1. Pertenecientes a comunidades indígenas o minoría nacional o étnica, religiosa o lingüística

126.- En la práctica de las diligencias se procurará la prontitud en la investigación, la sencillez de las entrevistas, la no confrontación con el agresor, el acondicionamiento de los espacios y la privacidad de las actuaciones.

127.- En caso de ser preciso examen médico físico o psicológico de la víctima, será siempre necesario su consentimiento. En su práctica se permitirá que la víctima sea acompañada por una persona de su confianza y se extremará el respeto a los usos y costumbres de protección, confianza y seguridad de cada pueblo o minoría.

128.- Las oficinas de atención a la víctima deberán poder contar con un enfoque intercultural, con capacidad de integrar en el abordaje de la víctima y del presunto agresor los elementos derivados del sistema de ideas, creencias y normas que regulan el comportamiento de su grupo de identidad (organización económica, organización política, familiar, parentesco, lenguaje, ciencias, religiones, normas morales) en la medida en que influyen en el marco de la violencia de género.

129.- Si la víctima pertenece a una comunidad indígena es necesario contar con un/a traductor/a que pueda informarla con claridad de sus derechos y pueda auxiliar al fiscal en la entrevista y la toma de la denuncia. En la práctica, se procurará que concurra con alguna persona de su confianza o de su entorno que pueda realizar labores de intérprete.

10.2. Niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos propios de la violencia de género

130.- Si la víctima es menor de edad, no puede denunciar por sí misma. La denuncia ha de ser interpuesta por persona mayor de edad que la acompañe. Si la víctima menor acudiera sola al Ministerio Público, el/la Fiscal deberá levantar un informe de conocimiento del hecho

y proceder a investigar de oficio como conocedor de la noticia criminis. En estos casos deberá ponerse dicha circunstancia en conocimiento del Instituto de la Niñez y de la Infancia.

131.- Las investigaciones en que intervengan niños, niñas y adolescentes son preferentes en su tramitación, evitando la espera y toda forma de revictimización.

132.- Las entrevistas deben ser breves y en lenguaje sencillo.

133.- Cualquier diligencia en que intervengan niños, niñas o adolescentes se llevará a cabo de forma privada y con auxilio de peritos o profesionales especializados, especialmente en el caso de menores de 12 años.

134.- Se evitará toda confrontación con el agresor, citándoles días distintos. Se procurará acondicionar los espacios físicos a tales efectos.

135.- Las entrevistas y declaraciones con las víctimas menores de edad se realizarán preferentemente en salas con cámaras Gesell o sistemas de grabación, que permitan realizar una entrevista única, para evitar la revictimización derivada de la reiteración.

136.- Se garantizará la confidencialidad, evitando el ataque al derecho de imagen del menor de edad a través de publicaciones o cualquier tipo de reproducción de la imagen. Igualmente se adoptarán las cautelas necesarias para evitar la identificación del niño, niña o adolescente.

137.- Se procurará practicar la declaración de los menores de edad víctimas de delito como prueba anticipada.

138.- Para cualquier examen físico o psíquico será preciso contar con el consentimiento informado de la niña o adolescente o de su representante legal. En todo caso, deberá oírse al niño, niña o adolescente.

139.- En caso de delitos sexuales, si fuere necesario, el examen médico legal se realizará con consentimiento de la niña o adolescente, acompañado/a por persona de su confianza y realizando los exámenes estrictamente necesarios para la determinación de los hechos.

140.- En caso de que los niños, niñas y adolescentes hayan sido testigos en su entorno de actos de violencia continuada o actos graves de violencia, el/la fiscal valorará el grado de afectación psicológica de aquellos por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito contra la integridad psíquica de los niños, niñas y adolescentes.

141.- En caso de retractación o contradicción en las manifestaciones del niño, niña o adolescente, los/as fiscales deberán actuar en tutela de su interés, sin ejercer presiones,

respetando su proceso y sirviéndose de los servicios de apoyo a las víctimas y de protección a la niñez y la adolescencia.

10.3. Mujeres con discapacidad física o psíquica

142.- Los/as fiscales procurarán eliminar los obstáculos que impidan el acceso de la víctima a la justicia. Para ello, a través de instituciones o asociaciones especializadas obtendrán el apoyo necesario, como por ejemplo, de intérpretes de lengua de signos.

143.- Si la víctima no pudiera trasladarse a la fiscalía o la barreras arquitectónicas del edificio impidieran su acceso, los/as fiscales, acompañados por el/la psicólogo/a de la oficina de atención de la víctima o de la unidad de atención, se trasladaran al domicilio de la mujer para la práctica de la entrevista, declaraciones y valoración del riesgo que se precisen.

144.- En la práctica de las diligencias de investigación se seguirán, en general, las mismas cautelas que en relación al resto de grupos de mujeres especialmente vulnerables.

10.4. Mujeres extranjeras, migrantes, refugiadas o desplazadas internas

145.- En el caso de mujeres extranjeras presentes en el país de forma temporal, la víctima deberá ser informada de sus derechos en su propio idioma, sirviéndose de intérprete gratuito o persona de su confianza. El/la fiscal procurará la práctica de prueba anticipada a fin de asegurar la continuación del proceso. En todo caso se actuará con la debida diligencia para asegurar que la denuncia, exámenes médicos físicos o psicológicos se practiquen sin demora.

146.- Si la víctima es extranjera será necesario contar con un/a traductor/a que pueda informarla con claridad de sus derechos y pueda auxiliar al fiscal en la entrevista y la toma de la denuncia. Cuando la víctima no conoce nuestro idioma y no concurre con alguna persona de su confianza o de su entorno que pueda funcionar como traductor, se propone que el Ministerio Público se ponga en contacto con la Embajada o el Consulado de su país de origen en Panamá para que asistan a su ciudadana como intérpretes.

147.- En el caso de mujeres inmigrantes o refugiadas, las oficinas de atención a la víctima de los Ministerios Públicos o los respectivos servicios de atención coordinada deberán tomar en cuenta dicha circunstancia al valorar el riesgo, resaltando posibles situaciones de dependencia emocional y económica. Se valorará también el peligro derivado de la situación administrativa, en caso de que la víctima se halle ilegalmente

en el país. Se procurará ofrecer acompañamiento a las víctimas a través de organizaciones de la sociedad civil especializadas en atención a mujeres migrantes, especialmente si la víctima expresa su intención de no denunciar o de no continuar en el proceso.

148.- Con relación a las mujeres desplazadas y migrantes, los/as fiscales deberán trabajar coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención a esta población. En ningún caso la falta de documentación identificativa será un obstáculo para la atención a la víctima. Se oficiará a los organismos oportunos o se emplearán los medios técnicos necesarios para facilitar la identificación.

11. Datos, elementos y diligencias imprescindibles que han de constar en el expediente fiscal para investigación de delitos de violencia contra la mujer.

Organización de la fiscalía de violencia contra la mujer

149- Los expedientes o causas de la Fiscalía referidas a delitos de violencia contra la mujer en las relaciones interfamiliares deben tener carácter preferente en su investigación. A tal fin, deberá articularse un sistema que permita fácilmente identificarlas. Se pueden utilizar carpetas con colores intensos, diferentes a las utilizadas normalmente, o utilizar grandes pegatinas en colores destacados, que contengan la leyenda “CAUSA PREFERENTE” “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.

150.- Los expedientes o causas de la Fiscalía deberán contener:

- a. La valoración del riesgo del Ministerio Público y, en su caso, la policial.
- b. La declaración de la víctima, en los términos vistos anteriormente y, en su caso, como prueba anticipada.
- c. Informe del forense.
- d. Informes médicos emitidos por otros servicios públicos o privados como consecuencia de la atención primaria dada la víctima como consecuencia del hecho.
- e. Informes psicológicos o psiquiátricos referidos a la víctima por los que haya seguido terapia o tratamiento como consecuencia de la situación de maltrato reiterado que pudiera estar padeciendo desde hace tiempo, a fin de acreditar situaciones de maltrato reiterado en el tiempo u hostigamiento.

En estos casos será necesario una prueba pericial psicológica y/o social dirigida a valorar la afectación del hecho/-s vividos en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, su intensidad y si tal vivencia ha producido una secuela que necesite tratamiento especializado de psicoterapia. El informe deberá concretar la existencia del nexo causal entre la situación de violencia sufrida y el estado anímico de la víctima, para concluir finalmente si se ha producido o no un daño moral. Nunca el informe debe estar orientado a valorar la veracidad del testimonio de la víctima.

La pericial de trabajo social estaría orientada a valorar psicosocialmente las consecuencias de la violencia en la vida personal, familiar, laboral, afectiva, de descanso y de proyección de futuro de la víctima. A través de entrevistas a sus familiares más cercanos, compañeros/as de trabajo, vecinos/ es y/o amistades se podrá valorar el impacto de la violencia en diversos planos de la vida de la víctima.

- f. Datos de los registros u otros documentos que acrediten antecedentes previos tanto policiales, de la Fiscalía, como judiciales del agresor y la existencia de otras medidas de protección respecto a esta víctima u otras. Es decir, resoluciones judiciales previas condenatorias en materia de violencia de género del sujeto activo ya sea contra esta víctima o contra otra.
- g. Antecedentes policiales o fiscales previos de la víctima en relación con su condición de víctima de violencia contra la mujer y las anteriores medidas de protección adoptadas a su favor.
- h. Fotografías de las lesiones de la víctima y, en su caso, del lugar en que ocurrieron los hechos a fin de evidenciar como se encontraba la estancia o lugar tras la violencia.
- i. Las declaraciones espontáneas sobre los hechos que las partes manifestaran a la llegada de la policía
- j. La identificación y toma de declaración de todas aquellas personas que puedan haber sido testigos directos del hecho o testigos de referencia de los mismos, así como de familiares y amigos que puedan conocer la existencia de maltrato físico o psicológico del agresor a la víctima.
- k. El resultado de los análisis, y pericias relacionados con la muestras y vestigios tomadas en el lugar de los hechos, objetos intervenidos o muestras obtenidas de la víctima o su presunto agresor.
- l. La solicitud de las medidas de protección y la resolución de las medidas de protección acordadas o denegadas.
- m. Testimonio o copia de las medidas de protección incumplidas y los datos registrales de la plataforma informática del asunto donde se acordaron las medidas de protección.
- n. La documentación que acredite las diligencias policiales recogidas en el Protocolo de Coordinación, en su apartado Dirección de Investigación.

12. Formas alternativas a la conclusion del proceso

151.- La investigación tiene que terminar con una respuesta proporcional y necesaria a la gravedad de los hechos. El uso de medidas alternativas al proceso penal, cuando existe una situación de desigualdad de poder entre el agresor y la víctima, puede dar lugar a una minimización y justificación de la violencia ejercida.

12.1. Conciliación y mediación

152.- Conforme a la legislación vigente no es posible tanto en el sistema inquisitivo como en el acusatorio la conciliación y la mediación en los delitos de violencia contra la mujer en las relaciones intrafamiliares.

12.2. Principio de oportunidad

153.- No deberá aplicarse en ningún caso el criterio de oportunidad en los delitos de violencia contra la mujer. Debe agotarse toda la investigación de oficio (entrevistas con vecinos, familiares, personas del trabajo de la víctima, amigos, hijos informes psicológicos...).

154.- No solapar el derecho de la víctima a una vida libre de violencia con la pena natural. El intento de suicidio del agresor después de un brutal ataque a los bienes jurídicos de primer orden de la víctima no puede quedar compensado con el delito cometido.

12.3. La suspensión condicional del proceso. (Solo para el delito de quebrantamiento)

155.- Los/as fiscales podrán optar por la suspensión condicional del proceso siempre que concurran estos criterios:

- a. El agresor no haya disfrutado del beneficio de suspensión condicionada del proceso con anterioridad
- b. El/la Fiscal condicionará la suspensión del proceso al cumplimiento de una obligación por parte del agresor, que sea proporcional a la situación de riesgo y al reproche penal de los hechos. Si fuera necesario se realizará una nueva valoración de riesgo ante la opción de la suspensión condicional del proceso. Se procurará por los/as Fiscales que, en todo caso, se imponga la medida de prohibición de aproximación a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo cualquier otro que frecuente y/o la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio o procedimiento ya sea teléfono, correo postal, correo electrónico y/o la prohibición de permanecer en el domicilio común.
- c. El/la fiscal haya obtenido la autorización para la suspensión de su superior jerárquico.
- d. Los/as fiscales, antes de concluir que procede la suspensión condicional del proceso, deberán informar a la víctima y oírla al respecto, como medio para garantizar su participación en el proceso y la debida protección de su interés jurídico. Si tiene representante legal prestará el consentimiento a la suspensión y a las obligaciones que se acuerden.

12.4. Los acuerdos de pena

156.- Es la única salida alternativa al proceso de los delitos de violencia contra la mujer en el sistema acusatorio.

157.- Los acuerdos de pena en delitos de esta naturaleza tienen que estar siempre autorizados por el fiscal coordinador o superior.

158.- La reducción de la pena suele oscilar entre 24 a 36 meses de prisión. Esta pena a su vez puede ser reemplazada por días multas, trabajo comunitario o sometimiento a tratamientos médicos. En estos delitos se aconseja aplicar las penas de trabajo comunitario y tratamiento médico dirigido a corregir los patrones de desigualdad de poder en las relaciones con las mujeres.

159.- Los/as fiscales superiores coordinadores, antes de acordar la pena de días multa como alternativa, deberán seguir estos requisitos:

- a. Ha de oírse a la víctima sobre la sustitución de la pena privativa de libertad por la de días multa. Igualmente en cualquier supuesto en que se acuerde otra pena de reemplazo.
- b. Ha de estar satisfecha la responsabilidad civil derivado del delito, o al menos, si se va a satisfacer en plazos, un acuerdo formal del pago o una declaración de reconocimiento de la deuda en plazos.

- c. No se recomienda el acuerdo de pena, si en plazo de prescripción de la pena impuesta en una sentencia anterior por otro delito violento, se ha cometido el hecho delictivo, cuya pena se pretende reemplazar.

12.5. La retractación.

160.- Los/as fiscales, antes de dar validez a la retractación, deberán comprobar que en la misma la víctima ha sido firme, constante, coherente, razonable y consistente con el resto del material de prueba ya recabado. En caso contrario la retractación jurídica ha de tenerse por inválida.

161.- Los/as fiscales han de hacer valer la veracidad de las declaraciones primeras de la víctima, por ser más cercanas a la comisión del delito, y más espontáneamente expresadas en medio de la conmoción que ha sufrido.

162.- Los/as fiscales han de tener en cuenta los informes médico-forenses, psicológicos y sociales previamente emitidos, sobre todo si los mismos concluyen que la mujer ha sido víctima de alguna forma de maltrato.

163.- Si fuera necesario, se deberá contar con una prueba pericial psicológica que explique el fenómeno de la violencia contra la mujer, el ciclo de la violencia y cómo influye el mismo en la actitud y aptitud para declarar de la víctima.

164.- La teoría del caso debe estar fundada en inferencias lógicas y razonables, amparadas en la sensibilización frente a este fenómeno y la pericial psicológica al respecto.

12.6. El desistimiento de la denuncia.

165.- En el sistema inquisitivo-mixto el desistimiento de la víctima puede presentarse en la fase de investigación en donde si no hay principios de prueba facilitados en la denuncia, como la identificación de testigos u otros hallazgos o vestigios, va a resultar muy difícil continuar la investigación de oficio y ejercer posteriormente la acción penal, sin la colaboración de la víctima. En estos casos, si es posible, deberá derivarse a la mujer a la oficina de atención a la víctima para la nueva valoración del riesgo y en su caso, mantener las medidas de protección, siempre que fuera posible, hasta la finalización del proceso.

166.- Si el desistimiento se produce posteriormente, cuando ya se ha recabado suficientes indicios para formular la acusación, y, en todo caso, antes del juicio oral, los/as Fiscales procurarán alegar la inadmisibilidad del desistimiento por las

razones expuestas anteriormente. Deberán igualmente asegurar la protección de la víctima.

167.- Si finalmente es absolutamente inviable la confección racional de una teoría del caso y el asunto ha de finalizar, las eventuales medidas de protección adoptadas, por ley, han de cesar. Los/as Fiscales deberán derivar a la mujer a los servicios civiles existentes en la zona, si la situación de riesgo subsistiera, a fin que realicen un seguimiento de la víctima.

13. Especial mencion a la investigacion de los delitos de femicidio, agresion sexual y quebrantamiento de medida de proteccion

13.1. Femicidio

168.- Por femicidio se entiende la muerte violenta de una mujer, por el mero hecho de serlo. Se trata de una categoría jurídico política que evidencia la violencia extrema ejercida contra las mujeres por la inequidad de género e incluye todas las muertes de mujeres causadas en el ámbito de las relaciones de pareja, muertes violentas en serie y muertes de mujeres en el marco del crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas, prostitución o explotación sexual de niños, niñas o adolescentes o de mujeres mayores adultas.

169.- En el marco del presente protocolo nos referiremos en exclusiva a las muertes de mujeres causadas en el ámbito de relaciones de afectividad, presentes o ya finalizadas, con o sin convivencia, así como muertes de mujeres causadas por familiares o personas que conviven en un mismo hogar.

170.- En la investigación de los delitos de femicidio habrá de tomarse en cuenta las siguientes particularidades:

- a. La investigación del delito de femicidio o de tentativa de femicidio se iniciará de oficio tan pronto se tenga conocimiento o sospecha del delito y cualquiera que sea el medio por el que se haya tenido conocimiento de la muerte, incluidos los medios de comunicación.
- b. Los servicios de policía que acudan a la escena del crimen deberán avisar al personal de la Fiscalía para que se traslade al lugar de los hechos. Desde ese momento dirigirán la investigación, garantizarán la legalidad de las actuaciones policiales que se realicen y vigilarán que se respeten todas las exigencias de la cadena de custodia.
- c. Recogerán todas la evidencias posibles (fluidos biológicos y químicos, fibras, uñas, tierras, huellas, objetos que ayuden a la identificación del autor y la secuencia de

los hechos investigados), garantizando la correcta toma de los vestigios, su sellado y etiquetado, y la cadena de custodia en todo momento. Procederán a la incautación de instrumentos u objetos que se hayan podido utilizar para la comisión del crimen. Se realizarán las fotografías necesarias del cadáver, del lugar y de datos relevantes. Se levantará una minuciosa acta de inspección del lugar.

- d. El/la fiscal verificará que se tomen los datos de identidad completos de los testigos que se encuentren presentes, tomándoles declaración inmediata y, si no es posible, citándoles ante el/la Fiscal para que con la mayor brevedad presten declaración.
- e. Deberán comprobar si la persona presenta signos de vida y solicitar urgentemente asistencia sanitaria para su traslado al centro médico más cercano. En todo caso custodiarán la escena del delito para conservar las pruebas. Deberán avisar sin dilación al/la fiscal o autoridad competente, encargado/a de la dirección de la investigación.
- f. La investigación en el lugar de los hechos corresponde a la policía especializada, bajo la dirección del Ministerio Público, que será la encargada de realizar una primera inspección del lugar, recoger los primeros indicios y plantear la teoría del caso del delito, recoger la declaración de los/as testigos y proceder a la aprehensión/detención del presunto agresor.
- g. En caso de no ser posible la presencia de servicios de policía especializados, corresponderá a los cuerpos policiales ordinarios realizar la investigación del delito. Deberán identificar los datos y testigos relevantes, proceder a la detención del presunto agresor, identificar los diversos objetos de interés para la investigación, proceder a su fijación escrita o por fotografía, recogida, conservación y entrega, siguiendo la cadena de custodia. Los Ministerios Públicos suscritos se encargarán de dar formación especializada a los servicios de seguridad pública competentes con el fin de mejorar la técnica de investigación criminal en este tipo de delitos, especialmente en caso de muerte o lesiones graves.
- h. Toda diligencia de investigación realizada deberá hacerse constar por escrito, incluyendo datos que permitan precisar con exactitud la hora de llegada y la ubicación de la escena.
- i. Además de otro tipo de evidencias, en este tipo de investigación se solicitará la fijación, recolección y embalaje de rastros de sangre en el lugar de la investigación para establecer a quien pertenecen y proceder a su posterior comparación, si fuera necesario.
- j. En caso de fallecimiento, el levantamiento del cadáver será practicado en todo caso por representante del instituto de medicina legal, quien procederá a la fijación y levantamiento de evidencias en el cadáver, a su recolección y embalaje. En el caso de existir indicios como folículos pilosos, fibras, hisopos de uñas, fluidos biológicos, ropas u otros objetos se pondrán a disposición de la autoridad para su envío a los laboratorios de criminalística, garantizando la cadena de custodia.
- k. Deberá identificarse el cadáver, recogiendo sus características fisonómicas, señas particulares, complexión, tomando fotografías y la ficha dactilar.

- l. El/la profesional del instituto de medicina legal llevará a cabo una exploración ginecológica para recoger las muestras biológicas que puedan determinar la existencia, en su caso, de contacto sexual previo a la muerte.
- m. La autopsia médico-legal tendrá como finalidad determinar la causa de la muerte, así como describir la concurrencia de lesiones innecesarias para causar la muerte o mutilaciones en su cuerpo, lesiones con características de forcejeo o lucha, posibles indicios de delito sexual, uso de armas o lesiones previas propias de un maltrato habitual, todo ello con el objeto de comprobar el posible femicidio.
- n. El/la fiscal, cuando sea necesario en función del tipo penal de femicidio, oficiará a los/as peritos en psicología, trabajo social o antropología a fin de que practiquen las pruebas periciales necesarias para determinar las circunstancias en que se ha cometido el crimen: relación previa entre víctima y agresor, actos de violencia previos, presencia en el agresor de patrones culturales misóginos o de discriminación e irrespeto a las mujeres o, en su caso, elaborar el estudio comparativo entre víctima y agresor para determinar la posible ventaja física entre ambos, elementos que contribuyen a la acreditación del marco de desigualdad y de poder en que se ejerce esta forma de violencia.
- o. El/la fiscal deberá informar a la familia de la víctima de las circunstancias de la muerte, de los derechos que les asisten como familiares de víctimas de violencia, incluidas las medidas de protección y/o cautelares que pueden solicitar en caso de riesgo de nuevas intimidaciones o revictimizaciones y las indemnizaciones que les correspondieran.
- p. Los/as fiscales aplicarán la perspectiva de género evitando la aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que puedan justificar la conducta del presunto agresor o culpabilizar a la víctima de lo sucedido. A estos efectos no se dará ninguna consideración especial a los posibles intentos de suicidio de los agresores.
- q. En caso de suicidio o intento de suicidio del presunto agresor, se desarrollará la investigación de la muerte de forma semejante a lo antes expuesto, a fin de acreditar la autoría del hecho y las circunstancias de su comisión.

13.2. Tentativa de femicidio/homicidio

171.- Si la víctima hubiera sufrido lesiones como consecuencia del acto, los/as fiscales se apoyarán fundamentalmente en los medios de prueba médicos para diferenciar el hecho como delito de homicidio/femicidio en grado de tentativa o como delito de lesiones con sus respectivos agravantes.

172.- El informe del instituto de medicina legal deberá establecer pautas para la valoración del riesgo vital de las lesiones sufridas. Se valorará especialmente el lugar o zona del cuerpo afectado por la acción agresiva y su vulnerabilidad e

importancia para la vida de la víctima; la clase, características y dimensiones del arma o instrumento empleado y si ésta es idónea para causar resultados mortales; la dirección, número y violencia de los golpes; la fuerza empleada y la gravedad de las lesiones sufridas.

173.- El/la fiscal procurará demostrar la intención de causar la muerte para poder calificar el hecho en grado de tentativa. Para tal fin se servirá de la declaración de la víctima, de los testigos, de las investigaciones policiales y de los resultados del informe médico forense.

174.- Con el fin de valorar las circunstancias y motivación del delito se deberán tomar en consideración los siguientes factores: condiciones del lugar y tiempo de comisión del delito; las circunstancias conexas con la acción; las manifestaciones del propio autor, en particular las palabras precedentes y acompañantes a la agresión, así como la actividad anterior y posterior al delito, tales como insultos, provocaciones o amenazas; las relaciones previas existentes entre el imputado y la víctima; la causa del delito; la intervención posterior del agresor, auxiliando o desatendiendo a la víctima, pese a comprender la gravedad del acto, y las personalidades de autor y víctima.

175.- Durante la práctica de las diligencias de investigación se extremarán las cautelas para evitar la confrontación visual entre la víctima sobreviviente y el agresor. Se servirán de cámaras Gesell, sistemas de grabación o circuitos internos de televisión.

176.- El/la fiscal velará para que la víctima sobreviviente, sus familiares y los/as testigos estén protegidos durante toda la investigación y el procedimiento frente al riesgo de nuevas agresiones, presiones o intimidaciones del agresor o de su entorno.

177.- Los/as fiscales, en todo caso, adoptarán, solicitarán y/o coordinarán las medidas de protección y/o cautelares.

178.- Especial atención se tomará sobre niños, niñas y adolescentes descendientes de la víctima y del agresor. Se les deberá garantizar desde el primer momento de conocido el hecho protección, seguridad y acompañamiento especializado garantizando su permanencia temporal o definitiva en el ámbito familiar más idóneo.

179.- Tanto en el delito de femicidio consumado o intentado, si los hijos menores de edad han tenido que presenciar cómo su padre o la pareja sentimental de su madre o el novio de ésta da muerte a su progenitora, los/as fiscales deberán investigar y comprobar si concurre además un delito de lesiones psíquicas a los menores, como consecuencia de él evidente daño psicológico que se les ha causado al realizarse tan vil acción en su presencia.

13.3. Delitos sexuales

180.- Los delitos contra la integridad sexual son investigados por la Fiscalía especial de delitos sexuales.

181.- Si junto al delito sexual sobre mujer que es la esposa o pareja sentimental del agresor, concurren otros delitos de violencia contra la mujer, deberán investigarse en el mismo expediente a fin de evitar la victimización secundaria. Los/as fiscales deberán consultar al Fiscal Superior a fin de valorar la posibilidad de que se abra un solo expediente por todos los delitos.

13.4. Delito de quebrantamiento de medidas de protección

182.- La competencia para conocer estos delitos corresponde a la Justicia Municipal, por ello se suele investigar por los personeros. No obstante lo anterior, en algunas provincias, por acuerdo de los Fiscales Superiores, se ha determinado que sean los fiscales de familia quienes instruyan los delitos de quebrantamiento.

183.- La investigación de dichos delitos ha de corresponder a la Fiscalía de familia, en tanto se crean las fiscalías especiales de violencia contra la mujer, previstas en la Ley 82 de femicidio.

184.- La investigación de los delitos de quebrantamiento de medidas por la Fiscalía de familia o, en su día, por la Fiscalía especializada de violencia contra la mujer permitirá la acumulación de procesos penales cuando además del quebrantamiento se haya producido un nuevo acto de violencia. Con ello se evitará la revictimización de la víctima.

185.- El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias para asegurar que los/as fiscales que han llevado la investigación de causas penales donde se acordaron medidas de protección, sean los mismos en investigar los delitos de quebrantamiento de dichas medidas.

186.- En los casos de mayor gravedad del quebrantamiento o en caso de reiteración de los quebrantamientos de la misma medida o de otras acordadas respecto del mismo agresor, el/la fiscal podrá solicitar en la propia causa donde se quebranta la medida, comparecencia ante el juez de garantías para solicitar la aprehensión provisional. Las razones para fundamentar el alegato serían: el riesgo y peligro para la víctima y el desprecio del agresor al principio de autoridad, habiendo quedado patente que la medida no es suficiente para garantizar la protección de la víctima.

187.- Si el quebrantamiento va asociado a un acto violento grave contra la víctima, el/la Fiscal podrá solicitar la aprehensión provisional en el propio delito de quebrantamiento,

fundamentada en el supuesto excepcional de riesgo inminente para la vida de la víctima.

188.- Cuando la investigación del delito haya sido iniciada por los personeros, deberán remitir oficio urgente al fiscal que conoció en la causa donde se ha acordado la medida de protección, con la información necesaria respecto del quebrantamiento, (como puede ser copia del reporte policial, de la denuncia de la víctima, declaración de los testigos que acrediten el quebrantamiento), para que pueda solicitar ante el juez de garantías la aprehensión provisional.

189.- Recordemos que la policía puede aprehender al sujeto que quebranta por considerar que es un hecho flagrante. Si la policía, al llegar al lugar de los hechos, el sujeto está junto a la víctima o en el domicilio y existía una medida de protección de alejamiento o de desahucio, estamos ante una situación de flagrancia. Por ello, la comunicación que debe hacerse al fiscal de familia que conoce el caso del que emana la medida quebrantada tiene que ser casi inmediata. Antes de transcurrir 48 horas desde la puesta del detenido a disposición del fiscal, éste debe solicitar la comparecencia para solicitar la medida cautelar de aprehensión provisional.

190.- De esta manera aprovechamos que el sujeto ya está detenido y por tanto evitamos el riesgo de su fuga o su puesta en paradero desconocido.

14. Condiciones para la viabilidad del protocolo

14.1. Medidas a adoptar por parte del Ministerio Público de Panamá

191.- Para garantizar la efectividad del presente Protocolo el Ministerio Público adquiere los siguientes compromisos:

14.1.1 Con relación a la especialización, capacitación y organización del Ministerio Público

1. Promover la creación de las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer, que funcionarán veinticuatro horas en cada Distrito Judicial, dando cumplimiento al mandato legal establecido en el art. 57 de la Ley nº 82, de 24 de octubre de 2013.
2. Procurar que el personal al servicio de las fiscalías especializadas y, en tanto se hace efectiva su creación, el personal al servicio de la Fiscalía de Familia encargada de la investigación de los delitos objeto del presente protocolo, reciba capacitación y formación inicial y continuada en perspectiva de género. La capacitación se dirige a conocer el fenómeno de la violencia con perspectiva de género, su ciclo, comprender la conducta de la víctima en sus vaivenes procesales y la sensibilización de los operadores jurídicos. Se enseñarán estrategias de empoderamiento y de comunicación con estas víctimas.
3. Promover que en las fiscalías especiales de violencia contra la mujer los/as fiscales, además del expediente penal, conozcan de los procedimientos civiles de familia tales como separación, divorcio, suspensión de la guarda y crianza de los/as hijos/as menores de edad, reclamación de filiación, disposición a favor de la mujer e hijos de muebles e inmuebles... El conocimiento serio y profundo previo de los procesos penales de ese matrimonio o pareja sentimental, constituye el pilar y fundamento para solicitar y defender ante el juez de Familia o de la Niñez, el derecho de los hijos menores de edad y de la mujer víctima, a una vida libre del maltrato y de la violencia.
4. Procurar que el ámbito de competencias de las fiscalías especiales de violencia contra la mujer incluya la investigación de los delitos sexuales y el femicidio, al

- menos en grado de tentativa o intentado, cometidos por los esposos, exesposos, las parejas sentimentales o exparejas. Ambas figuras exigen para su ejecución, medios y formas de violencia específicas y contextualizadas en el ámbito de la violencia de género contra la mujer. En estos casos, la víctima, que ha de colaborar en la investigación, necesita que el empoderamiento, seguimiento y el trato dispensado lo realicen profesionales capacitados y formados en la perspectiva de género.
5. Promover que en las Fiscalías de Familia, donde existan varias, o en el ámbito de los fiscales superiores, se establezca un/a fiscal delegado/a o coordinador/a de los delitos de violencia contra la mujer. Entre otras funciones, tendrá que resolver, dando uniformidad a los criterios de actuación, las consultas de los/as funcionarios/as del Ministerio Público, coordinar estrategias de actuación del fiscal en estos casos y dar las autorizaciones precisas a determinadas actuaciones del fiscal actuante, como por ejemplo, en los acuerdos de pena o la decisión de sobreseimiento.
 6. Facilitar que la investigación de las distintas causas por violencia contra la mujer existentes entre una misma víctima y agresor corresponda, en tanto sea posible, al mismo Fiscal, quien tendrá así el conocimiento y la información completa del historial de agresiones y maltrato de la víctima y el agresor, así como del comportamiento procesal de las partes. Ello permitirá valorar con más eficacia la futuras medidas de protección a adoptar, y los alegatos de una medida cautelar de aprehensión provisional dada la reiteración y circunstancias concurrentes en todos los hechos.
 7. Procurar que los/as fiscales que realizan la investigación de los delitos de violencia contra la mujer, sean los mismos que celebren el juicio oral posterior.
 8. Dar prioridad a la investigación de los delitos de violencia contra la mujer, evitando dilaciones innecesarias.
 9. Promover que los/as receptores/as de las denuncias sean profesionales en Derecho y que reciban formación inicial y continuada en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género. Se procurará la estabilidad en el puesto de los/as receptores/as de denuncias de violencia contra las mujeres, a fin de evitar que receptores no capacitados realicen turnos en este servicio de violencia doméstica. En tal caso, deberá darse la capacitación y formación correspondiente a todos los receptores.
 10. Promover acuerdos de cooperación institucional con los servicios sanitarios públicos y servicios oficiales que permitan asegurar el cumplimiento de las penas de trabajos comunitarios y tratamientos médicos alternativos previstas para estos delitos, especialmente con el fin facilitar que en los acuerdos de pena se pueda sustituir la pena privativa de libertad por trabajos comunitarios o sometimiento a tratamiento médico. Con esta medida se podría evitar aplicar la pena de días multa, en tanto minimiza el problema y grava la economía de la propia víctima.

14.1.2. Con relación al Registro de Agresores, Condenados y de Medidas de Protección

192.- El conocimiento de los antecedentes penales del agresor y del paso previo por el sistema judicial de la víctima es fundamental para la adopción de las medidas de

protección y/o cautelares y para la individualización de la pena posteriormente. Sería necesario:

1. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 82 relativo a la consulta del Registro de agresores del Ministerio y del Órgano judicial.
2. Crear un registro propio en Fiscalía en materia de medidas de protección:
 - a. Para la eficaz protección de la víctima, es preciso el conocimiento de las medidas cautelares ya adoptadas respecto al agresor y la víctima entre sí o respecto a otros sujetos y su cumplimiento. Por ello, es necesario que en el seno de las fiscalías que investigan los delitos contra la mujer, se instaure un registro informático de las medidas de protección adoptadas, al que tengan acceso los Sres. /Sras. Fiscales.
 - b. En el registro se haría constar la medida adoptada, su inicio, cese, modificaciones, agravaciones e incumplimientos de la misma. Asimismo, deberá indicarse la autoridad que la ha adoptado, el número de expediente de la fiscalía, la fecha de notificación al agresor con los requerimientos y apercibimientos legales.
 - c. El sistema de registro debe ser informático, permitiendo como criterios de búsqueda, el número de expediente con el que se registra en la Fiscalía, y el nombre de la víctima o/y el victimario, así como sus números de cédula.
3. Promover la cooperación interinstitucional entre todas las autoridades con competencia para la adopción de medidas de protección a fin de crear un sistema único de registro en el que puedan registrar y consultar todas ellas.

14.1.3. Con relación a la dotación de medios materiales

193.- Dotar al Ministerio Público de los medios personales y materiales necesarios para alcanzar la mayor eficacia en la lucha contra los delitos contra las mujeres.

194.- Disponer de instalaciones adecuadas para que la víctima pueda prestar su declaración ante el Ministerio Público en un ámbito de intimidad y confidencialidad. Para ello, es necesario contar con un despacho o un habitáculo donde solo se encuentren la víctima, el/la Fiscal y el/la receptor/a de la denuncia, sin interferencias de otros funcionarios o denunciantes.

14.2. Propuesta de modificación legislativa

195.- El Ministerio Público, dentro del marco de sus competencias, promoverá la incorporación al Código Penal de la pena de prohibición de acercamiento a la víctima como pena accesoria en los delitos de violencia contra las mujeres. En el caso de penas privativas de libertad la pena accesoria será impuesta por un tiempo de cumplimiento simultáneo a la pena privativa de libertad, pero superior al menos un año a la duración

de ésta. En el caso de penas de días multa o trabajos comunitarios o tratamiento la duración de la prohibición de aproximación será proporcional a la gravedad del delito.

196.- Con esta medidas se garantiza la protección de la víctima, no sólo durante la tramitación del procedimiento, sino finalizado éste. La pena de prohibición de alejamiento de la víctima es necesaria, eficaz y proporcional al delito cometido, y garantiza la retribución general y especial al proteger a la víctima, sobre todo en aquellos casos donde la pena a imponer como privativa de libertad no se llegue a cumplir por pactar un acuerdo de pena y ser reemplazada por una multa.

14.3. Coordinación con otras instituciones

197.- Para la mejor efectividad del presente Protocolo y asegurar la debida diligencia en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, el Ministerio Público considera precisa la adopción de las siguientes medidas:

14.3.1. Policía

1. Se propone la creación de la figura del **Policía de Enlace**, conforme al Protocolo de Coordinación Ministerio Público-Policía:
A fin de lograr una eficaz coordinación entre el Ministerio Público y la Policía, en la fase de investigación del delito, se nombrará en cada estación policial, entre los miembros que formen parte de las unidades especializadas, o en su caso, y hasta que ello sea posible, entre los de mayor capacitación en violencia contra la mujer, un agente que sirva, en cada caso, de enlace, que se encargará de mantener comunicación directa con el Fiscal de Familia o agente encargado del Ministerio Público que le corresponda según el zona, tanto en relación con las actuaciones de investigación, como respecto del seguimiento de las medidas de protección.
2. Se propone la dotación de mayor número de **Unidades de Prevención Comunitaria** y la potenciación de las mismas como elementos fundamentales en el control de las medidas de protección.
 - a. Para el control y seguimiento de las medidas de desalojo y alejamiento y prohibición de comunicación, los/as fiscales pueden auxiliarse en las unidades de policía preventiva comunitaria. Estas unidades se caracterizan por realizar actuaciones de prevención, además de su función represora. Actúan como policía de proximidad, acercándose a la ciudadanía cautelarmente, (sin necesidad que se esté o se haya cometido una infracción o delito).
 - b. A tal fin, el/la Fiscal oficiará a la unidad de policía preventiva, ordenando la vigilancia y control de las medidas penales que se interesen. Se acompañará con el oficio, copia de la resolución que contenga la medida, identidad de las partes y la duración de la misma. El/la Fiscal deberá indicar la valoración del

riesgo respecto de la víctima en parámetros de no existente, bajo, medio o alto, conforme al anexo III.

- c. Los/as agentes designados por su superior jerárquico, se trasladarán periódicamente y de manera aleatoria al domicilio de la víctima, donde se entrevistarán con la misma a fin de comprobar si se cumple la medida de alejamiento, desalojo o de prohibición de comunicación. También realizarán rondas en las inmediaciones del domicilio o lugares donde frecuente la víctima. Se podrán entrevistar con vecinos y comerciantes de la zona a fin de determinar si el agresor se ha acercado al lugar.
- d. La frecuencia de las entrevistas y de las rondas, así como la intensidad en su control, dependerá de la valoración de riesgo transmitida por el/la fiscal a la unidad.
- e. Si los agentes de la unidad, en el cumplimiento del control de la medida, constataran el incumplimiento de la misma por el presunto agresor, encontrándose en la zona de exclusión del alejamiento o en el domicilio prohibido, procederán a su aprehensión y su puesta a disposición del Ministerio Público en 24 horas. Asimismo acompañarán a la víctima al Ministerio Público para interponer la correspondiente denuncia.

14.2.2. Defensoría de Oficio para las víctimas

198.- Se considera esencial para la adecuada protección a la víctima poder contar con un defensor de oficio desde el momento en que manifieste su voluntad de denunciar. Por ello, al informarle de sus derechos, si la víctima deseara un defensor, la oficina de asistencia de la víctima o la unidad de asistencia y prevención debe gestionar el mismo, a través de un oficio al departamento de asesoría legal gratuita y, en su caso, poniendo a la víctima en contacto con el Departamento de asistencia legal gratuita para víctimas del delito del órgano judicial o cualquier otro organismo que brinde asistencia legal gratuita.

199.- Debe darse cumplimiento al mando legal previsto en el art. 61 y siguientes de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, y crearse los centros de atención integral de atención a las víctimas durante el proceso. Mientras tanto ha de existir una comunicación más fluida del Ministerio Público y la Defensoría Pública

14.2.3. Corregidores/as y Jueces Nocturnos

200.- En los distritos donde rige el sistema inquisitivo las medidas de protección las puede adoptar el Corregidor y el Juez Nocturno, que son órganos de naturaleza administrativa, y por otro lado, el Ministerio Público y los órganos judiciales. Con el fin de evitar resoluciones contradictorias que puedan perjudicar a la víctima:

1. El Ministerio Público promoverá un acuerdo de cooperación institucional por virtud del cual la Corregiduría disponga de un plazo máximo de 72 horas para remitir la resolución de las medidas al órgano competente. En todo caso, el control de la

medida adoptada le corresponde al órgano administrativo, al menos hasta su remisión al Ministerio Público.

2. Las medidas de protección acordadas por el/la Corregidor/a serán recurribles ante el Alcalde. Una vez adoptadas, el Corregidor ha de remitirlas, junto al expediente, al Fiscal competente, aunque el recurso esté pendiente de resolución. Recibidas, el/la Fiscal podrá mantenerlas, adoptar otras o modificarlas, en un sentido distinto a lo que finalmente resuelva el Alcalde. Al final la víctima puede encontrarse con dos resoluciones acordando medidas para su protección incompatibles o contradictorias entre sí, dictadas por el órgano judicial y por el órgano administrativo.
3. El Ministerio Fiscal promoverá un acuerdo de cooperación institucional por virtud del cual, habiéndose interpuesto recurso contra la medida adoptada por el/la Corregidor/a, éste remita el expediente al Fiscal con carácter preferente, a fin de que confirme o modifique las medidas adoptadas. La resolución del Fiscal será recurrible ante el Juez de garantías. Con ello se pretende evitar el riesgo de contradicción entre la medida adoptada por la Corregiduría y la resolución del Fiscal que podrá resolver en sentido distinto al Alcalde.
4. En otro caso, debe valorarse, excepcionalmente, que los corregidores-regidores o jueces nocturnos puedan adoptar las medidas de protección necesarias, notificarlas a las partes y ejecutarlas. También se encargarían de su control y seguimiento. Tras adoptarse las medidas y notificada a las partes, o al menos a la víctima, el corregidor-regidor o el juez nocturno deberá remitir inmediatamente el expediente al representante del ministerio público competente.

201.- En el sistema acusatorio las medidas cautelares sólo pueden ser acordadas por el/la Fiscal, por el Juez de Garantías y por Tribunal del Jurado. No obstante, subsiste un pugna jurídica en orden a determinar si los Corregidores pudieran adoptar las medidas cautelares, tras la promulgación de la Ley 63, al no derogarse expresamente la Ley 38. Es una importante cuestión jurídica que han de resolver los altos Tribunales de la Nación o bien el propio Legislador, debiendo promover el Ministerio Público su pronta resolución, con los recursos o impulsos administrativos necesarios.

14.2.4. Instituto de Medicina Legal

202.- Sería conveniente que existiera en todos los centros un/a forense de guardia, presencial o de localización, de 24 horas, o al menos de 12 horas, según el volumen de población que les correspondiera atender por los delitos a los que se refiere este Protocolo.

14.4. Atención a la víctima

203.- El Ministerio Público, con el fin de garantizar la debida protección a la víctima, promoverá que la profilaxis y el tratamiento psiquiátrico y psicológico de las víctimas de delitos sexuales y de violencia de género tengan carácter gratuito.

Anexos

Anexo I. Información a la víctima de los servicios jurídicos de la ciudad de Panamá⁴

Servicios jurídicos	
Órgano Judicial Asistencia Legal a las Víctimas del Delito	Dirección: Plaza Edison, 4to piso, arriba de Ilumitec Tel.: 515-7300 Correo electrónico: victimasdeldelito@organojudicial.gob.pa
Defensoría del Pueblo	Dirección: Calle 50, P.H. Chagres Teléfonos: 500-9813 y 500-9814 Página web: www.defensoriadelpueblo.gob.pa
Fundación de asistencia legal comunitaria (FUNDALCOM)	Dirección: Edif. JJ Vallarino, ofic.#6, Ave. Justo Arosemena y calle 32 Tel.: 208-7060 Correo electrónico: info@fundalcom.org
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)	Dirección: Calle 51, Bellavista Edificio Cádiz, Apartamento 2A (Apartado Postal 6-58-66) El Dorado Tel.: 223-5351 y 263-1970 Correo electrónico: cealp@sinfo.net
Consultorio de asistencia legal de la UP	Dirección: Asistencia legal, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Tel.: 523-6148 y 523-6149 Correo electrónico: javila21@cwpanama.net
Consultorio jurídico de la Universidad ISAE	Dirección: Vía Transísmica, frente al McDonald Tel.: (+507) 278-1432 (+507) 278-1433
Consultorio jurídico ULACIT	Dirección: Vía España, diagonal al colegio IPA Tel. 323-6600
Colegio de Abogados	Dirección: Calle República de Bolivia y Calle 38E Teléfonos: (507) 225-6371 - (507) 225-7466 - (507) 227-8841

4. Documento facilitado por CRD de Panamá.

Anexo II. Modelo de denuncia⁵

ORGANISMO RECEPTOR DE LA DENUNCIA			
Nombre del organismo:		Dirección:	
Tfno/Fax/correo electrónico:			
Intervención de la Oficina de Atención a la Víctima: SÍ NO Otro servicio: ¿Cuál?			
I. VICTIMA			
Nombre y apellido:			
Documento de identidad:	Tipo:	Número:	
Exhibe documento:	SI NO NO TIENE	Nacionalidad:	
Sexo:	Edad:	Fecha de Nacimiento:	
Domicilio: (Si es de difícil identificación adjunte un croquis al dorso última página)			
Ciudad:	Provincia:	Código postal:	
Teléfono:	e-mail:		
Direcciones de redes sociales:			
Ocupación:	Condiciones de trabajo: ESTABLE NO ESTABLE		
Estudios: NO SI - PRIMARIA SECUNDARIA – TERCARIA – UNIVERSITARIA (marque el máximo nivel alcanzado completo)			
Composición del grupo familiar:			Conviven: SI NO
Vínculo con el/la denunciado/a:			Conviven: SI NO
Teléfonos y domicilios alternativos (familiares, amigos, otros)			
Teléfono y domicilio de la familia primaria y/o forma de contacto:			
Figuras referentes. Teléfono y/o forma de contacto:			
I.1 DENUNCIANTE			
Coincide con la víctima: SI NO (No completar si la víctima coincide con denunciante)			
Nombre y apellido:			
Documento de identidad:	Tipo:	Número:	
Exhibe documento	SI NO NO TIENE		
Domicilio:			
Ciudad:	Provincia:	Código postal:	

5. Este modelo de denuncia es una adaptación del modelo que recoge el Protocolo regional para la investigación con perspectiva de género, el modelo del Ministerio Público fiscal de la Provincia de Chubut (Argentina) y el modelo de solicitud de la orden de protección de la Dirección General de la Policía Nacional de España.

Teléfono:		e-mail:	
Vínculo con la Víctima:			
Representa una institución:	SI	NO	CUÁL?:
Cargo:			
Pide reserva de identidad:	SI	NO	
II. DENUNCIAS ANTERIORES			
C.R.D.:		Fechas aproximadas:	
Fiscalía		Fechas aproximadas:	
Otro lugar ¿cuál?:			
Tipo de agresión:			
Agresor/a:			
Agredido/a:			
Resultado:			
III. DENUNCIADO/A			
Nombre y apellido:			
Documento de identidad:	Tipo:	Número:	
Nacionalidad:		Lugar de nacimiento:	
Sexo:	Edad:	Fecha de Nacimiento:	
Domicilio particular:			
Ciudad:	Provincia:	Código postal:	
Teléfono:		e-mail:	
Direcciones de redes sociales:			
Ocupación:	Condiciones de trabajo: ESTABLE NO ESTABLE		
Domicilio del trabajo:		Horario laboral:	
Otras actividades (deportivas, recreativas, etc.):		Horario/lugar:	
IV. RELATO DEL HECHO			
Descripción detallada de fecha, hora, lugar y cómo sucedieron los hechos:			
Indique si tiene lesión en el cuerpo:			
Indique si efectuó consulta médica (lugar, médico, otro)			
Cuenta con certificado médico que lo acredite: SI NO			
Indique si existió algún daño que deba ser constatado (en el domicilio, vehículo, prendas y/u otros objetos, etc.):			
Indique si hubo amenazas: SI NO			

Tipo:
Indique si sabe el lugar donde se encuentra el denunciado/a en este momento:
Indique si sabe si porta o posee armas de fuego: SI NO Lugar dónde las guarda: Si sabe si se encuentran registradas: Si las utiliza en forma habitual:
Indique si sabe si porta o posee otras armas u objetos que sean utilizados como tales: SI NO ¿Dónde las guarda?
Indique si cuenta con algún elemento que esté relacionado con el hecho: SI NO Correo electrónico: Mensaje de texto: Mensaje de voz: Filmación: Fotografías: y/o cualquier otro elemento:
Indique si sabe si el denunciado/a posee vehículo: SI NO Datos y características del mismo: Patente/dominio:
Indique si sabe si el denunciado/a consume: Medicación: SI NO ¿cuál? Bebidas alcohólicas: SI NO Sustancias psicotrópicas o drogas: SI NO ¿cuál? Indique si sabe si el denunciado/a tiene antecedentes psiquiátricos: SI NO Si incidieron en el hecho y/o en la relación intrafamiliar y/o afectiva que los vincula:
¿Es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza? SI NO
Indique si sabe si ha protagonizado otros hechos de violencia con y contra terceros:
Describa detalladamente un día del denunciado/a (días, recorridos, horarios, lugares a los que concurre, modo en que se traslada):

V. TESTIGOS	
Indique si pudo observar alguna persona que haya presenciado o tenga conocimiento sobre el hecho relatado: <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> SI NO </div>	
1. Nombre y apellido:	
Documento de identidad:	
Domicilio:	
Teléfono de contacto:	
2. Nombre y apellido:	
Documento de identidad:	
Domicilio:	
Teléfono de contacto:	
3. Nombre y apellido:	
Documento de identidad:	
Domicilio:	
Teléfono de contacto:	
ASISTENCIA JURÍDICA	
¿Tiene Vd. abogado/a que le asista? SÍ NO	
En caso negativo, ¿desea contactar con el Centro de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima para recibir asesoramiento jurídico? SI NO	
FIRMAS	
Firma del denunciante y aclaración	Funcionario/a (con sello)
CROQUIS DE DOMICILIO SI ES NECESARIO	
Formulario Denuncia Violencia contra la Mujer	

Anexo III. Modelo de valoración de riesgo⁶

Fecha de la Entrevista:
Lugar dónde se realiza la Entrevista
Expediente Fiscal N°:
Posible delito:
Profesionales Intervinientes:

II.- DATOS DE LA VÍCTIMA

Apellido y Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		
Nacionalidad:		
Estado Civil:		
Domicilio:		
Domicilio alternativo:		
Teléfono:		
Fijo.....Celular.....Laboral.....		
Relación o parentesco que tiene con la persona denunciada:		
Apellido y Nombre del presunto agresor:		
¿Pertenencia de la víctima a comunidad indígena o minoría, migrante o desplazada interna?	Si	No
¿Convive en la misma casa que la persona denunciada?	Si	No
¿La vivienda es propia?	Si	No
¿Reúne condiciones de seguridad?	Si	No
¿Cuáles?		
¿Tiene trabajo?	Si	No
¿Dónde trabaja?		
¿La víctima y el agresor trabajan en el mismo lugar?	Si	No
¿Depende económicamente del agresor?	Si	No
¿Dispone de algún recurso económico o ayuda externa para mantenerse?	Si	No
¿Cuenta con vecinos/amigos/ familiares que pudieran ayudarla?	Si	No
¿De qué manera?		

6. Este modelo es la adaptación del modelo de valoración de riesgo del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut (Argentina), el modelo que propone el Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género y el EPV-R de Echeburrua, Amor, Loinaz y Corral.

¿Convive con hijos menores?	Si	No
¿Convive con hijos mayores?	Si	No
¿Son agredidos física/psíquicamente?	Si	No
¿Existen otras Víctimas de Violencia física o sexual en el seno de la familia?	Si	No
¿La agresión proviene del mismo agresor?	Si	No
Si la Víctima es mujer ¿se encuentra actualmente embarazada?	Si	No
¿Meses/Semanas de gestación?		
¿Padece de alguna Enfermedad o Discapacidad Física o Psíquica o de cualquier tipo?	Si	No
¿Cuál?		
¿Está tomando alguna medicación?	Si	No
¿Por qué causa o motivo?		
¿Ha pensado alguna vez o ha intentado suicidarse?	Si	No

III.- EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA:

1.- Tipo de violencia:		
Psicológica:	Si	No
Física:	Si	No
Sexual:	Si	No
Patrimonial:	Si	No
2.- Escalada de la Violencia en relación a la Intensidad:		
Inicio:	Si	No
Moderada:	Si	No
Grave:	Si	No
Muy Grave:	Si	No
Extrema:	Si	No

3.- <u>Etapas del Ciclo Vital de la pareja en que se produce la agresión:</u>		
Noviazgo/Inicio de la pareja o del matrimonio:	Si	No
Embarazo:	Si	No
Nacimiento del Primer hijo:	Si	No
Nido Vacío:	Si	No
Separación Conyugal:	Si	No
Conformación de nueva pareja:	Si	No

IV.- APLICACIÓN DE LA ESCALA DE RIESGO:

EPV-R de Echeburrua, Amor, Loinaz y Corral (versión adaptada)

I. Datos personales	Valoración
1. Falta de arraigo del agresor o de la víctima	0 o 1
II. Situación de la relación de pareja en los últimos 6 meses	Valoración
2. Separación reciente o en trámite de separación	0 o 1
3. Acoso reciente a la víctima o incumplimiento de la prohibición de acercamiento	0 o 2
III. tipo de violencia en los últimos 6 meses	Valoración
4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones	0 o 2
5. Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares	0 o 2
6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en el último mes	0 o 3
7. Amenazas graves o de muerte en el último mes	0 o 3
8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de	0 o 3

cualquier tipo	
9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves	0 o 3
10. Agresiones sexuales en la relación de pareja	0 o 2
IV. Perfil del Agresor	Valoración
11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja	0 o 3
12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior	0 o 2
13. Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, compañeros de trabajo, etc.)	0 o 3
14. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas	0 o 3
15. Antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamientos psiquiátricos o psicológicos	0 o 1
16. Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento	0 o 3
17. Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la víctima	0 o 3
V. Vulnerabilidad de la víctima	Valoración
18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes	0 o 3
19. Intentos de retirar denuncias previas o de arrepentimiento de la decisión de abandonar o denunciar al agresor	0 o 3
20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o dependencia	0 o 2
VALORACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA Bajo: (0-9) Medio: (10-23) Alto: (24-48)	

V.- CONCLUSIONES:

<u>1.-Respecto al Riesgo:</u>		
Alto	Si	No
Medio	Si	No
Bajo	Si	No
<u>2.-Respecto de las Medidas de Protección:</u>		
Se sugiere adopción de Medidas con carácter urgente:	Si	No
<u>3.- Respecto a las Expectativas de la Víctima para participar en el proceso:</u>		
¿Desea participar?	Si	No
¿Tiene dudas?	Si	No

Se deja constancia que el presente Informe refleja la situación de la Víctima y/o su grupo familiar, al momento de la entrevista, que pudo o no coincidir la misma con la fecha de los hechos denunciados, y a los efectos de lo establecido en el inciso V del Protocolo de Intervención en Violencia Familiar. Así mismo, se podrá evaluar nuevamente el caso ante la existencia de una nueva denuncia, luego de transcurrido un tiempo considerable, no menor a tres meses, o bien si las circunstancias contextuales presentaran cambios considerables respecto del análisis inicial.

CONTROL DE CALIDAD DEL FORMULARIO

¿Está Vd. de acuerdo con el resultado de la valoración? SÍ NO
Si no está de acuerdo, ¿qué resultado le parece más adecuado?
Por favor, indíquelo y razone su opinión:

Firma Profesionales Intervinientes

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

EUROsocial es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsocial pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.



www.eurosocial-ii.eu